

BOLETIN OFICIAL

DE LA

PROVINCIA DE SEGOVIA

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios reciban este Boletín, dispondrán que se fije en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los señores Secretarios cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, de conservar los números de este Boletín, coleccionados ordenadamente para su encuadernación, que deberá verificarse al final de cada año.

SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

En la Capital.—Trimestre, pts. 5,00
Fuera de Id.— — — 6,25
Pago adelantado. Núm. suelto. 0,35

PRECIOS DE INSERCIÓN

Los edictos y anuncios oficiales y particulares que sean de pago satisfarán por línea... 0,30

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales se han de remitir por todas las autoridades al Gobernador respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los mencionados periódicos. Se exceptúa de esta regla al Excmo. Sr. Capitán General. Los anuncios particulares y avisos de suscripciones se reciben en la Imprenta Provincial (Establecimientos Provinciales de Beneficencia).

Gobierno Civil de la Provincia

SECRETARÍA.—CIRCULAR

TRABAJO

El empleo preferente de obreros agrícolas, dispuesto en el Decreto de 28 de Abril, suscita constantemente dudas y crea conflictos locales por interpretaciones erróneas. Con objeto de que los Alcaldes y los propios obreros acomoden su conducta a las disposiciones vigentes, conviene precisar que al Decreto antes mencionado siguieron, con normas aclaratorias, los del 5 de Agosto, 12 de Septiembre, 15 de Octubre y 9 de Noviembre.

Por lo que se refiere a esta provincia, el extracto de las reglas que deben tenerse presentes, son las siguientes:

En los trabajos agrícolas los patronos emplearán con preferencia a los braceros que sean vecinos del Municipio en que aquellos deban verificarse (Decreto de 28 de Abril).

Para los trabajos de poda, desbaratado y tala de olivos y en general para los de poda y arbolado, serán preferidos los obreros locales prácticos que los hayan venido realizando en años anteriores. A falta de tales obreros especializados, los patronos podrán contratar libremente a los avecindados en otros pueblos (Decreto del 6 de Agosto).

Quedan exceptuados del alcance del decreto-ley de 28 de Abril, los obreros forasteros ajustados por un año que vinieren prestando sus servicios con tres años de anterioridad.

Los municipios que careciendo de término o siendo éste de extensión reducida contarán con sobrante de brazos para las faenas agrícolas, se considerarán agregados al término municipal limítrofe más amplio y de menor contingente obrero, siempre que se trate de una misma provincia, al objeto de constituir juntos una sola unidad intermunicipal para la aplicación de este Decreto.

Los predios enclavados en más de un término municipal se cultivarán con obreros de los respectivos municipios proporcionalmente a la extensión que tengan.

Respecto al pastoreo no trashumante, se reduce a dos años de servicios anteriores el ajuste que ha de permitir a los pastores, aunque sean forasteros, seguir prestandolos en el término municipal del contrato. (Decreto del 12 de Septiembre).

Los censos de obreros locales a los que alcancen preferencia para las

faenas del campo, se formarán solamente con obreros agrícolas propiamente dichos, con exclusión de los que se dediquen a otras profesiones. La preferencia de los obreros locales no excluye el empleo de obreros forasteros cuando resulten insuficientes los del pueblo para las faenas que exijan una realización rápida e intensa. Los Jurados mixtos podrán resolver las dudas acerca de la necesidad de emplear mano de obra forastera. Los obreros forasteros cobrarán los mismos jornales y se someterán a iguales condiciones de trabajo que haya establecidos para los obreros de la localidad. (Decreto del 30 de Septiembre.)

Existiendo en la actualidad dirigidas a este Gobierno civil reclamaciones y denuncias por interpretación deficiente de las disposiciones precedentes, conviene que tanto los Alcaldes como los patronos y obreros analicen la procedencia de dichas reclamaciones y denuncias. Se sobreentiende que de ningún modo debe omitirse en la regulación de los actuales trabajos agrícolas el cumplimiento estricto y urgente de lo ordenado.

Segovia, a 16 de Noviembre de 1931.

EL GOBERNADOR,
Manuel Andrés Casaús

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA

DECRETO

Como Presidente del Gobierno de la República y de acuerdo con el mismo,

Vengo en disponer lo siguiente:

Artículo único. Las normas contenidas en el decreto fecha 9 de los corrientes, referentes a la recolección de la aceituna en la provincia de Jaén, se hacen extensivas y se aplicarán en toda su integridad en las provincias de Córdoba y Sevilla.

Dado en Madrid a trece de Noviembre de mil novecientos treinta y uno.—Manuel Azaña.

(Gaceta del 14 de Noviembre.)

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO

En atención a las solicitudes recibidas para que se prorrogue el plazo establecido en el artículo 2.º del decreto de 31 de Octubre de 1931 para

la revisión de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas.

El Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Justicia, decreta:

Artículo 1.º Se prorroga por una sola vez hasta 15 de Diciembre del año actual el plazo de quince días establecido en el párrafo segundo del artículo 2.º del decreto de 31 de Octubre de 1931 para solicitar la revisión de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas.

Artículo 2.º Las Autoridades judiciales y administrativas otorgarán las máximas facilidades a los arrendatarios y aparceros para todo cuanto se refiera a la expedición de certificaciones, presentación de documentos y fórmula de peticiones.

Dado en Madrid a trece de Noviembre de mil novecientos treinta y uno.

—El Presidente del Gobierno de la República, Manuel Azaña.—El Ministro de Justicia, Fernando de los Ríos Urruti.

(Gaceta del 14 de Noviembre.)

DECRETO

El artículo 1.611 del Código civil, en su apartado 3.º, de conformidad con lo dispuesto en la base 26 de la ley de 11 de Mayo de 1888, prometía una ley especial reguladora de la redención de los dominios en los foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes semejantes.

Largo tiempo transcurrió hasta que el Poder público dictó normas legales para resolver las múltiples cuestiones planteadas con la existencia de aquellos derechos, satisfaciéndose al fin esta necesidad por los Reales decretos de 25 de Junio y 23 de Agosto de 1926, relativos al régimen de foros y cuya subsistencia fué declarada por el artículo 4.º del Decreto de este Ministerio de 5 de Julio último.

El plazo de cinco años, señalado en el artículo 8.º del Real decreto de 25 de Junio de 1926 para redimir las cargas que establecían los artículos anteriores de la misma disposición, ha sido a su vez prorrogado indefinidamente por el Gobierno de la República en Decreto de 18 de Junio del año actual.

Pendientes de estudio y resolución de las Cortes la reforma agraria y en tanto no exista una nueva ordenación jurídica de la propiedad rústica que solucione el problema de la tierra y cuantos con él se relacionan, se han suscitado algunas dudas respecto a la subsistencia de los foros en distintas partes de la Península y ha de estimarse justo que pierdan su carácter local y se amplíen adquiriendo nota

de generalidad mediante su aplicación en todo el territorio de la República las disposiciones contenidas en el Decreto de 25 de Junio de 1926 y en el reglamento para su aplicación, que declararon redimibles los foros y otros gravámenes de análoga naturaleza jurídica sobre bienes inmuebles en las provincias de Galicia, Asturias y León, constituidos antes de la promulgación del Código civil.

En virtud de las consideraciones expuestas, el Presidente del Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Justicia, decreta:

Artículo único. Los Decretos-leyes de 25 de Junio y 23 de Agosto de 1926 y el Decreto de 18 de Junio de 1931 sobre el régimen de foros, subforos, foros fragmentarios, rentas en saco, sisas, derechuras, cédulas de plantura y cualesquiera otros gravámenes de análoga naturaleza jurídica sobre bienes inmuebles serán aplicables en toda España en tanto que las Cortes no dispongan otra cosa, en todo el territorio de la República.

Dado en Madrid, a tres de Noviembre de mil novecientos treinta y uno.—Manuel Azaña.—El Ministro de Justicia, Fernando de los Ríos Urruti.

(Gaceta del 4 de Noviembre.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA NACIONAL

DECRETO

Incorporado el Servicio de Pósitos a la Dirección general de Agricultura por virtud de lo dispuesto en el Real decreto-ley de 21 de Junio de 1929, quedaron relevados de intervenir en tal Servicio los patronatos locales de Acción Social y Emigración.

Consecuencia obligada debió ser la de que los Ayuntamientos volvieran a encargarse de los Pósitos municipales que habían sido confiados a tales organismos.

No obstante la falta de declaración explícita sobre esta circunstancia continúa dando lugar a consultas relativas a este extremo y a la composición de la Junta administrativa de los Pósitos a cargo de Ayuntamientos. A fin de aclarar de una vez estas dudas,

El Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Economía Nacional, decreta lo siguiente.

1.º Los Pósitos cuya administración continuara confiada a algún patronato local de Acción Social y Emigración deberán pasar en 1.º de Enero del año próximo a cargo de los Ayuntamientos respectivos.

2.º La Junta administradora de los Pósitos a cargo de Ayuntamientos estará constituida por todos los indivi-

duos de la Corporación municipal, formando también parte de aquélla, con voz y voto, el Secretario y el Depositario.

3.º Son de la exclusiva competencia de dicha Junta todos los acuerdos referentes al funcionamiento del Pósito, y de un modo especial los concernientes a la concesión y prórroga de los préstamos.

Dado en Madrid a siete de Noviembre de mil novecientos treinta y uno.—El Presidente del Gobierno de la República, Manuel Azaña.—El Ministro de Economía Nacional, Luis Nicolau D'Oliver.

(Gaceta del 8 de Noviembre).

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO

Aun habiéndose realizado sin interrupción el estampillado de billetes del Banco de España dentro del plazo que se amplió por Decreto de 4 de Septiembre último, existe todavía sin estampillar una cantidad considerable de billetes, por lo cual, y atendiendo peticiones formuladas, procede establecer una nueva prórroga.

Por lo expuesto, el Presidente del Gobierno de la República, de acuerdo con éste y a propuesta del Ministro de Hacienda, decreta:

Artículo 1.º El plazo señalado para las operaciones de estampillado de billetes del Banco de España se amplía hasta el 31 de Enero de 1932.

Artículo 2.º Se prorroga hasta el 15 del mismo mes el cumplimiento de la obligación impuesta al Banco de España, de entregar en sus pagos billetes provistos de la correspondiente estampilla.

Artículo 3.º La fecha señalada por el Decreto de 4 de Septiembre último, relativa a la admisión por las oficinas públicas de los billetes sin estampillar, se amplía hasta el 20 del propio mes de Enero próximo.

Dado en Madrid a catorce de Noviembre de mil novecientos treinta y uno.—Manuel Azaña.—El Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto Tuero.

(Gaceta del 15 de Noviembre.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

CIRCULAR

Excmo Sr.: Vista la instancia dirigida a este Ministerio por D. Pedro de Gárgolas, Presidente de la Federación de obreros y Empleados municipales, en súplica de que se dicte una Orden circular a fin de que las Autoridades provinciales encarezcan a los Ayuntamientos de su jurisdicción den el máximo de facilidades a los funcionarios a su servicio para que puedan concurrir a un Congreso extraordinario que ha sido autorizado por la Dirección general de Seguridad y que deberá celebrarse en esta capital durante los días 19 al 22 del presente mes:

Considerando que en la instancia de referencia se expresa que es manifiesta la extraordinaria importancia que ha de tener para la numerosa clase de funcionarios municipales por los temas que en el citado Congreso han de tratarse y que se enumeran en su escrito, así como claramente se advierte que no sólo guía a los solicitantes una aspiración de mejoramiento material, sino que, en primer término, han de procurar elevar el nivel cultural de la clase, a fin de asegurar una suficiencia que permita crear con el mencionado Cuerpo un instrumento capacitado para colaborar por medio eficaz en el

engrandecimiento de los Municipios, contribuyendo así a la prosperidad nacional, siendo de estimar los nobles y levantados propósitos que en el escrito de referencia se formulan.

Esta Dirección general ha tenido a bien estimar la instancia de que se trata y, en su consecuencia, autorizar a V. E. para que por su autoridad y en Orden que se publique en el *Boletín Oficial* encarezca a los Ayuntamientos de su jurisdicción den el máximo de facilidades, compatibles con el buen servicio, a sus funcionarios para que puedan concurrir al referido Congreso.

Madrid, 10 de Noviembre de 1931.—El Director general, González López.

Señores Gobernadores civiles de todas las provincias.

(Gaceta del 12 de Noviembre.)

Dirección general de Administración

En virtud del concurso anunciado en la *Gaceta* de 4 de Agosto último, han sido nombrados Secretarios por los Ayuntamientos que a continuación se citan, los señores que seguidamente se expresan, advirtiéndose que la publicación que se hace de estos nombramientos no los convalidará si estuviesen hechos con infracción de alguna disposición reglamentaria.

Madrid, 6 de Noviembre de 1931.—El Director general, González López.

Relación que se cita:

Provincia de Alava: Apellániz, don Miguel S. Martínez Martínez, ex Secretario de Ruesta (Zaragoza); Arlucea, D. Victoriano Larrauri y Zabala, Secretario de Ariñez; Armiñón, don Heriberto Arrate y Fernández Bobadilla, caso cuarto; Lagrán-Pipaón, don Constancio Fernández Asalsua, Secretario de Moreda; Labrada, D. Heliodoro Aguilar Sáez, caso cuarto; Laminoria, don Miguel S. Martínez Martínez, ex Secretario de Ruesta (Zaragoza); Oquendo, Miguel Mendeita Iruretabuena, Secretario de Lezama, Salinas de Añana; D. Fernando García López, Secretario de Fuenteburela (Burgos).

Idem de Albacete: Abengibre, don Alberto Ruiz Carrión, ex Secretario de Recueja; Cenizate, D. Patrocinio Gómez Pardo, ex Secretario de Villa de Vez; Pozuelo, D. César Herreros Moratalla, Secretario de Jorquera; Villalgordo de Júcar, D. Pompeyo Castillo Briones, opositor 80-1929; Villatoya, D. Ramón García García, opositor 115-1929; Villavallente, D. Ramón García García, opositor 115-1929.

Idem de Alicante: Bayeres, D. Vicente Benítez Gutiérrez, opositor 275-1929.

Idem de Almería: Escúllar, D. Eloy Peña Sarnago, Secretario de Abéjar (Soria); Huercal de Almería, D. José Martínez Caballero, ex Secretario de Illar.

Idem de Badajoz: Ahillones, don Juan Pais Infesta, ex Secretario de Valdaracete (Madrid); Capilla, D. Nicasio Fernández Morcillo, Secretario de Barahona (Soria); Santa Amalia, D. Eduardo Sánchez Rebote, Secretario de Valdecaballeros.

Idem de Barcelona: Bellprat, D. José Palomera Ruiz, caso cuarto.

Idem de Burgos: Cebrecos, D. Fantino Soladana Escribano, Secretario de Ramiro (Valladolid); Medinilla de la Dehesa, D. Fabián Pérez Peña, Secretario de las Celadas; Pineda de la Sierra; Villorobe, D. Amadeo Miñón Abad, Secretario de Cogollos.

Idem de Cáceres: Baños de Montemayor, D. Domingo Regidor Simón,

caso cuarto; La Pesga, D. Eliseo Alvarez, Secretario de Cervera de Buitrago (Madrid).

Idem de Córdoba: Obejo, D. Luis Marín Muñoz, ex Secretario de Guadalcázar.

Idem de Cuenca: Ribagorda, don Juan de M. García Serna, Secretario de Poyatos.

Idem de Gerona: La Bajol, D. Joaquín Bañuls Torres, ex Secretario de Cofrentes (Valencia); Caralps, don Francisco Sañas Casals, Secretario de Gombreny; San Lorenzo de la Muga, D. Ramón Funtané Costa, Secretario de Ferreol; San Vicente de Camós, D. Joaquín Ramió Massanas, Secretario de Camós; Viude, D. Baldomero Porta Batalla, Secretario de Pallejá (Barcelona).

Idem de Granada: Busquistar, don Federico García Rueda, Secretario de Pampaneira; la Malá, D. Francisco Carrión Campos, caso cuarto.

Idem de Guadalajara: Cendejas de Enmedio, D. Agustín Rodríguez Arroyo, Secretario de Langayo (Valladolid).

Idem de Lérida: Serradell, D. José Palomera Ruiz, caso cuarto.

Idem de Logroño: Muro de Aguas, D. Juan B. Pérez Ruiz, Secretario de Castroviejo; San Asensio, D. Norberto Nafarrate Ortiz de Landaluce, Secretario de Zalduendo (Alava).

Idem de Madrid: Carabaña, D. Victorio Gómez Fernández, ex Secretario de Yebra (Guadalajara); Majadahonda, D. José González Marruenda, Secretario de Villacorta (Segovia); Mecho, D. Balbino García de Lucas, Secretario de Torre de la Alameda; Piñuécar, D. Nicasio González Moreno, Secretario de la Acebeda-Horcajo de la Sierra; Pozuelo del Rey, D. Ricardo Palomo Vaquero, ex Secretario de Gamonal (Toledo); Titulcia, D. Nicasio Fernández Morcillo, Secretario de Barahona (Soria); Torrejón de la Calzada, D. Bartolomé Verger Serra, Secretario de Llocet de Vista Alegre (Balears); Torrelodones, D. Teodoro Sánchez Morales, opositor 238-1929, Valdaracete, D. Luis Núñez Maza, opositor 99-1929.

Idem de Palencia: Villarrabé, don Gregorio Merino Rico, Secretario de Soto de Cerrato.

Idem de Salamanca: Cabeza de Béjar, D. Juan A. González García, Secretario de Cabezuela de Salvatierra; Ejeme, D. Jacinto Escuadro García, Secretario de Coreses (Zamora).

Idem de Segovia: Labajos, D. Francisco Alvaro Hernando, ex Secretario de Anaya.

Idem de Soria: Alconaba, D. Sebastián Aznar Cuartero, Secretario de Leciñena; Momblona-Soliedra, D. Pedro Calvo Galán, Secretario de Alcuillá del Marqués; Peñalcázar, D. Ignacio Martín Crespo, caso cuarto; San Felices, D. Nicasio Fernández Morcillo, Secretario de Barahona; Ventosa de San Pedro, D. Pedro Calvo Galán, Secretario de Alcuillá del Marqués.

Idem de Teruel: Tortajada, D. Martín Moragriega Martín, caso cuarto.

Idem de Toledo: Chueca, D. Manuel Laderas García, Secretario de Codes-Guad; Novés, D. Vicente Maroto Bullido, caso cuarto.

Idem de Valencia: Beniajar, don Aureo Bonet Nieto, Secretario de Llimiana, (Lérida); Cofrentes, D. Bernardino Gómez García, Secretario de Zorra; Cuart de Poblet, D. Antonio Caballero Castelló, ex Secretario de Real de Gandía; Domeño, D. Leopoldo Juan Martínez, Secretario de Odena (Barcelona); Fuente Encarroz, D. Alejandro Ibáñez Solloso, caso cuarto; Fuenterrubles, D. José Palomera Ruiz,

caso cuarto; Gilet, D. Gerardo Cañigral Mínguez, ex Secretario de Alborache; Jaraco, D. Antonio Sánchez Pelechá, caso cuarto; Otos, D. Nicasio Fernández Morcillo, Secretario de Barahona (Soria); Rafelcofer, D. Alfonso Buendía Montilla, opositor 215-1929; Sálem, D. Luis Guillén Amat, caso cuarto; Vallada, D. Luis Cantón Payán, Secretario de Huécija (Almería).

Idem de Valladolid: Herrín de Campos, D. Gerásimo Palencia Martín, caso cuarto; Villaesper, D. Fantino Soladana Escribano, Secretario de Ramiro; Marzales, D. José Palomera Ruiz, caso cuarto.

Idem de Vizcaya: Lemóniz, don Benito Ibarreche Vidania, caso cuarto.

Idem de Zamora: Villardeciervos, D. Manuel Gallego Pérez, caso cuarto.

Idem de Zaragoza: Alcalá de Moncayo, D. José Palomera Ruiz, caso cuarto; Brea de Aragón, D. Jesús Ramiro Barra, ex Secretario de Deza (Soria); Cimballa, D. Luis Prieto Vidal, Secretario de Esparragosa (Badajoz); María de Huerva, D. Ezequiel García Rodríguez, ex Secretario de Fuentes de Ebro; Valpalmas, D. Luis Prieto Vidal, Secretario de Esparragosa (Badajoz); Quinto de Ebro, don Martín Salinas Eraso, Secretario de Pradilla de Ebro.

Con esta fecha se ha acordado, en el expediente de jubilación del Secretario del Ayuntamiento de Fuentelapeña (Zamora), D. Joaquín Herrera Alonso, el siguiente prorrateo, con arreglo a los tres quintos del sueldo anual de 5.000 pesetas:

El Ayuntamiento de Alaejos abonará mensualmente 83,87 pesetas.

El idem de Fuentelapeña, 166,13 pesetas.

El Ayuntamiento de Fuentelapeña recaudará del anterior la cantidad que le ha correspondido y abonará al interesado íntegramente su jubilación mensual.

Madrid, 4 de Noviembre de 1931.—El Director general, González López.

(Gaceta del 8 de Noviembre.)

Junta Calificadora de Aspirantes a destinos públicos

Propuesta provisional del mes de Septiembre de 1931, correspondiente a los destinos vacantes dependientes de las Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos publicados en la *Gaceta* 244 del día 1.º de dicho mes, con expresión de las clases de primera y segunda categoría del Ejército y de la Armada a quienes se proponen por ser los que mayores méritos reúnen, a juicio de las Autoridades expresadas, entre los presentados para optar a dichos destinos en las respectivas Corporaciones.

PROVINCIA DE SEGOVIA

Ayuntamiento de Cantalejo

198. Sereno, soldado Juan Alvarez Bravo, con 3-6-5 de servicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo interinamente.)

Otro, soldado Felipe Moreno Virsedad, con 6-0-13 de servicio. (Natural y vecino.)

199. Alguacil, soldado Felipe Sanz Arrans, con 3-11-1 de servicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo interinamente.)

200. Pregonero, soldado Eugenio Martín Sanz, con 3-10-3 de servicio. (Vecino.)

Ayuntamiento de Turégano

201. Alguacil municipal, Cabo Gumersindo San Juan San Frutos, con 5-11-9 de servicio. (Natural y vecino.)

NOTAS

1.^a A fin de evitar que por extravío de las documentaciones al ser enviados para que las Autoridades expidan las credenciales de los interesados, ocurran casos de reclamación por terminar los plazos posesorios o de presentación, tendrán en cuenta los individuos a quienes se les haya adjudicado destino, que a partir de los ocho días de esta publicación, deberán presentarse a posesionarse del mismo, reciban o no su credencial, no siendo excusa esta última circunstancia, y que el plazo de presentación para los destinos de la península expira a los treinta días, a contar desde la fecha de esta publicación, y para los residentes en Baleares y Canarias, como asimismo aquellos destinos en que se exijan fianzas, el plazo para presentarse será el de cuarenta y cinco días a partir también de la fecha de esta publicación, en que se declara firme la propuesta provisional del mes de Agosto último, sin perjuicio de lo que previenen los artículos 64, 65 y 66 del vigente reglamento de 6 de Febrero de 1928 (*Gaceta* número 48.)

2.^a Los individuos a quienes se les haya adjudicado destino, tomen o no posesión, no podrán solicitar otro en el plazo de dos años, a partir de esta fecha, salvo los destinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán concurrir sin limitación de tiempo.

3.^a Los señores Alcaldes de los pueblos en los que no existan estafetas u oficinas principales de Correos, darán cuenta, por oficio, de las tomas de posesión de los propuestos por esta Junta, para destinos de este servicio, al Administrador principal de Correos de la provincia a que pertenece el Ayuntamiento.

4.^a Los individuos propuestos, al tomar posesión de sus destinos, deberán presentar el certificado de antecedentes penales.

Madrid, 11 de Noviembre de 1931.—El Presidente, Agustín Luque.

(*Gaceta* del 14 de Noviembre.)

2688

Administración de Rentas Públicas de la Provincia

CIRCULAR

Matriculas de industrial

Terminado el 16 del mes actual el plazo concedido por esta Administración para la remisión a esta oficina de las matriculas de industrial que han de regir en el próximo año de 1932, y debiendo quedar terminadas y aprobadas definitivamente el día 20 de Diciembre próximo, conforme dispone el artículo 68 del vigente reglamento del ramo, se advierte a los Secretarios que hasta la fecha no han cumplido el servicio y a los que les han sido devueltos dichos documentos para subsanar errores, que de no obrar dichas matriculas en poder de esta Administración en el improrrogable plazo de ocho días, a contar desde que la presente circular aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin nuevo recordatorio se nombrarán comisionados que hayan de realizar el trabajo, con las dietas y gastos reglamentarios a que haya lugar, con cargo al Secretario del Ayuntamiento moroso, según dispone

la base 31 del Real decreto de 11 de Mayo de 1926 y la circular de la Dirección general de Rentas Públicas de 15 de Septiembre de 1929.

Segovia, 14 de Noviembre de 1931.—El Administrador de Rentas Públicas, P. V., Pablo Carabias.

2687

Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia
SUBASTA

No habiendo surtido efecto por falta de licitadores la subasta de 523 pinos que cubican aproximadamente 727.227 metros cúbicos de madera del monte denominado «Cabeza de Hierro y Peñalara» (La Cinta, radicante en el término municipal de Rascafría (Madrid, y propio de esta Comunidad, bajo el tipo de tasación de 26.907,40 pesetas, que fué anunciada en los *Boletines Oficiales* de la provincia de Madrid y de la de Segovia, en los días 5 y periódicos locales de esta ciudad los días 2 y 3 de Octubre último; se señala nuevamente para celebrarla el día 3 del próximo mes de Diciembre a las doce de la mañana en el mismo sitio, forma y condiciones que la anterior.

Lo que se anuncia al público por medio de este periódico para general conocimiento de aquellos a quienes les interesa.

Segovia, 14 de Noviembre de 1931. El Presidente, Pedro Rincón.

2588

Alcaldía de Montejo de Arévalo

Aceptada en principio por este Ayuntamiento la propuesta de la Comisión de Hacienda, de habilitación y suplemento de créditos imprescindibles e inaplazables, por medio de transferencia de las consignaciones del presupuesto vigente, como lo preceptúa el segundo caso del artículo 11 del reglamento de hacienda en relación con el artículo 303 del estatuto municipal, por no existir superávit real; se expone al público por quince días, conforme el artículo 12 del reglamento, a fin de que pueda ser examinada y contra ella producir las reclamaciones que crean procedentes.

Montejo de Arévalo, a 7 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Demetrio Sáiz.

2589

Alcaldía de Tolocirio

Aceptada en principio por este Ayuntamiento la propuesta de la Comisión de Hacienda, de habilitación y suplemento de créditos imprescindibles e inaplazables, por medio de transferencia de las consignaciones del presupuesto vigente, como lo preceptúa el segundo caso del artículo 11 del reglamento de hacienda, en relación con el artículo 303 del estatuto municipal, por no existir superávit real, se expone al público, por quince días, conforme el artículo 12 del reglamento, a fin de que pueda ser examinada y contra ella producir las reclamaciones que crean procedentes.

Tolocirio, a 8 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Anselmo Valero.

2563

Alcaldía de Santo Tomé del Puerto

Don Mariano Esteban González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto.

Hago saber: Que la Comisión de

Hacienda de este Ayuntamiento, en sesión del día siete del actual, propuso al mismo una habilitación de crédito que fué aprobada por unanimidad, con imputación al capítulo 1.º, artículo 11, de trescientas pesetas, y al capítulo 4.º artículo 1.º, de mil doscientas pesetas en los del vigente presupuesto de gastos: cuyas cantidades habrán de cubrirse con el exceso resultante en la liquidación del año anterior.

Esta consignación lleva el objeto de datar consignaciones para satisfacer gastos de elecciones y otras de alumbrado público.

Lo cual se hace público, en cumplimiento de las disposiciones vigentes y por el plazo de quince días, a contar del siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que por los contribuyentes del término municipal y personas interesadas puedan formularse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Santo Tomé del Puerto, 8 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Mariano Esteban.

2550

Alcaldía de Anaya

Don Feliciano Antón Yagüe, Alcalde de este pueblo de Anaya.

Hago saber: Que el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, en sesión del día 8 del mes actual, ha acordado proponer al Ayuntamiento la habilitación de un crédito de mil trescientas ochenta y tres pesetas 70 céntimos, con imputación al capítulo 1.º, artículo 2.º, concepto 1.º, del presupuesto ordinario del actual año y que habrá de cubrirse con el exceso resultante y sin aplicación de los ingresos sobre los pagos en la liquidación del año anterior, para atender a los gastos de la pensión que por jubilación le corresponde al Secretario que fué de esta Corporación, don Basilio Antón Ayuso, desde el 4 de Abril de 1929 hasta fin del presente año.

Y se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento vigente de hacienda municipal y con el fin de que puedan formular reclamaciones durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Anaya, 9 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Feliciano Antón.

2551

Alcaldía de Lastras de Cuéllar

Aprobada por el Ayuntamiento en sesión de hoy, una propuesta de habilitación y ampliación de créditos dentro del presupuesto municipal en ejercicio, por importe total de 274 pesetas, a cubrir mediante suplementos con cargo al exceso resultante y sin aplicación de los ingresos sobre los pagos en la liquidación del presupuesto del año anterior, e imputación a los capítulos, artículos y partidas que constan en el expediente, queda expuesto al público por término de quince días en la Secretaría del mismo, a fin de que pueda ser examinado por los vecinos que lo deseen y admitir las reclamaciones que contra el mismo puedan formularse, contándose desde en el que aparezca el presente en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia.

Lastras de Cuéllar, 8 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Magdaleno Herrero.

2577

Alcaldía de Laguna de Contreras

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 489 del estatuto municipal vigente, y de lo acordado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de Octubre, han sido designados para ocupar los cargos de Vocales natos de las Comisiones de evaluación de las partes real y personal del repartimiento general de utilidades que ha de formarse para cubrir el déficit del presupuesto en el año corriente, los siguientes señores:

Parte real

Don Casimiro de la Fuente Paúl, mayor contribuyente con domicilio en el término, por contribución territorial, riqueza rústica.

Don Nicasio de la Fuente Paúl, idem por idem, riqueza urbana.

Don Andrés Arribas Velasco, idem fuera del término, por contribución territorial, riqueza rústica.

Don Gregorio González Cano, idem por idem industrial y de comercio.

Parte personal

Don Manuel Alvaro de la Monja, cura párroco.

Don Mariano Arranz Miguel, mayor contribuyente por territorial, riqueza rústica.

Don Fidel Rojo Pérez, idem por riqueza urbana.

Don Cándido Herreros Redondo, idem por industrial y comercio.

Y se expone al público por término de siete días, para que los interesados legítimos puedan formular contra esta designación las reclamaciones que juzguen convenientes a su derecho.

Laguna de Contreras, 9 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Pedro Rojo.

2625

Alcaldía de Palazuelos de Eresma

Don Tomás Sanz Gil, Alcalde de dicho pueblo.

Hago saber: Que el Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión del día 1.º del actual, ha designado la Junta de conciliación que se dice en el artículo 6.º de la ordenanza sobre productos de la tierra como ingresos del presupuesto municipal del año 1932, cuya designación ha recaído en los señores siguientes:

Presidente: El Alcalde de este Ayuntamiento.

Vocales: Concejales, D. Tiburcio Alvaro Puente y D. Nicolás Plaza Sastre.

Como productores o agricultores.—De Palazuelos: D. Marcelino Huerta Plaza y D. Fermín Pérez Marinas.

De Tabanera: D. Anselmo Prieto de Andrés y D. José Velasco Garrido.

De San Cristóbal: D. Mariano Velasco Garrido y D. Fausto Pastor Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que tal Junta de conciliación se ha nombrado teniendo en cuenta lo que dispone la Real orden de 26 de Noviembre de 1928 y para que en término de diez días se presenten las reclamaciones u observaciones que crean oportunas en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Palazuelos de Eresma, 10 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Tomás Sanz.—P. S. M., El Secretario, Telesforo García.

Alcaldía de Tabanera la Luenga

2548

Don Miguel Lázaro Arribas, Alcalde de constitucional de Tabanera la Luenga.

Hago saber: Que para atender al pago del resto de la aportación municipal forzosa, contribuciones de propios y suministro de gasolina y aceite para el funcionamiento de la bomba del pozo público de esta localidad; la Comisión municipal de presupuestos de este Ayuntamiento ha propuesto que dentro del presupuesto municipal ordinario del mismo, para el corriente ejercicio económico, se verifiquen las transferencias siguientes:

DEL				AL			
	Capítulo	Artículo	Concepto		Capítulo	Artículo	Concepto
			PESETAS				PESETAS
8	3	2	159,27	1	6	1	159,27
8	3	2	49,71	1	7	1	49,71
8	3	2	100	7	1	3	100

Y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 del reglamento de hacienda municipal, fecha 23 de Agosto de 1924, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento para que puedan formular las reclamaciones que crean convenientes durante quince días desde que el presente aparezca inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tabanera la Luenga, 6 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Miguel Lázaro.

Alcaldía de Moraleja de Coca

2624

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 12 del reglamento de la hacienda municipal, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días, el expediente de habilitación de créditos que habrán de cubrirse con el exceso resultante y sin aplicación de los ingresos sobre los pagos del ejercicio de 1930, para atender a diferentes gastos del presupuesto actual, que en dicho expediente se detallan, y en virtud de acuerdo de este Ayuntamiento, para que durante indicado plazo de exposición sea examinado y se promuevan las reclamaciones que crean oportunas.

Moraleja de Coca, 11 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, José Cabrero.

Alcaldía de Encinillas

2568

Don Gregorio Manso de Marcos, Alcalde-Presidente de esta población y su término municipal.

Hago saber: Que en virtud de acuerdo tomado al efecto, se ha practicado el deslinde en la finca perteneciente al Ayuntamiento de este pueblo, radicante en este término municipal y sitio llamado del «Cubillo y la Huerta», habiéndose colocado los oportunos cotos o hitos provisionalmente en la demarcación o circunferencia de dicha finca.

Lo que se hace público por medio del presente para conocimiento de los dueños de las fincas o predios colindantes, con el fin de que en el plazo de quince días, presenten las reclamaciones los que se crean perjudicados; advirtiéndose que pasado dicho plazo no se atenderá ninguna y será considerado y subsistente el citado deslinde.

Encinillas, 9 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Gregorio Manso.

Alcaldía de Navares de Enmedio

2517

Don Víctor Moreno Alonso, Alcalde de este pueblo de Navares de Enmedio.

Hago saber: Que en sesión del día 4 del mes actual, ha acordado el Ayuntamiento pleno la habilitación de un crédito de mil seiscientos sesenta y ocho pesetas con veintinueve céntimos, con imputación al capítulo 11, artículo 5.º del vigente presupuesto de gastos, con destino a las obras de reparaciones de escuelas y casas para los Maestros, propiedad de este Municipio, cuyo crédito habrá de cubrirse con el exceso resultante y sin aplicación del año anterior.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento vigente de la hacienda municipal, y con el fin de que puedan formularse reclamaciones durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Navares de Enmedio, 6 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Víctor Moreno.

Alcaldía de Valdevacas y El Guijar

2569

Don Anastasio de Antonio Matamala, Alcalde constitucional de Valdevacas y El Guijar.

Hago saber: Que para atender al pago del 10 y 20 por 100 de propios, la Comisión de hacienda de este Ayuntamiento ha propuesto que, dentro del presupuesto municipal ordinario del mismo, para el corriente ejercicio económico, se verifique la transferencia siguiente:

DEL				AL			
	Capítulo	Artículo	Concepto		Capítulo	Artículo	Concepto
			PESETAS				PESETAS
7	1	1	200	1	7	4	250
			50				250
			250				250

Y en cumplimiento del artículo 12 del reglamento de la hacienda municipal, fecha 23 de Agosto de 1924, queda expuesta al público esa propuesta en la Secretaría de este Ayuntamiento, para que contra aquella puedan formularse reclamaciones en el plazo de quince días, contados desde el en que se publique este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valdevacas y El Guijar, a 6 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Anastasio de Antonio.

Alcaldía de Fuentemilanos

2555

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del vigente reglamento de hacienda municipal, queda expuesto al público en la Secretaría municipal, el expediente de habilitación sin transferencia de diferentes créditos, que en junto importan ochocientos cincuenta pesetas, para atender gastos necesarios que carecen de consignación en el actual presupuesto como son: pago de contribución e impuestos, material de escritorio, reposición de mobiliario, socorros a pobres y reparación de edificios públicos, con el fin de que pueda ser examinado y presentar contra él, en

el plazo de quince días cuantas reclamaciones crean pertinentes.

Fuentemilanos, 7 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Mauricio Allas.

Alcaldía de Tolocirio

El reparto uniforme sobre productos de la tierra y sus anexos, estará expuesto al público en la Secretaría municipal por término de quince días, durante los cuales podrán los contribuyentes o interesados formular las reclamaciones que estimen convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tolocirio a 11 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Anselmo Velasco.

2608

Alcaldía de Montejo de Arévalo

Los repartos uniformes sobre el producto de la tierra y sus anexos de 1930 y de 1931, estará expuesto al público en la Secretaría municipal por término de quince días, durante los cuales podrán los contribuyentes o interesados formular las reclamaciones que estimen convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Montejo de Arévalo a 11 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Demetrio Sáiz.

2626

Alcaldía de Navas de San Antonio

En el expediente que se instruye en este Ayuntamiento, en virtud de la petición formulada por doña Cipriana Sánchez Martín, doña Francisca García Vara y don Fermín Peña Muñoz, sobre prescripción de débitos que figuran en la relación de deudores al Municipio (resultas), contra don Damián Sánchez Martín, se ha acordado hacer pública la indicada petición, para que durante el plazo de diez días siguientes a la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan formular su oposición ante esta Alcaldía los vecinos y contribuyentes de este término, si consideran improcedente la reclamación de prescripción formulada, o que con ella puedan resultar perjudicados los intereses municipales.

En el expediente que se instruye en este Ayuntamiento, a virtud de la petición formulada por don Celestino Fernández Martín, sobre prescripción de débitos que figuran en la relación de deudores al Municipio (resultas), contra el mismo, se ha acordado hacer pública la indicada petición, para que durante el plazo de diez días siguientes a la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan formular su oposición ante esta Alcaldía los vecinos y contribuyentes de este término, si consideran improcedente la reclamación de prescripción formulada, o que con ella puedan resultar perjudicados los intereses municipales.

Navas de San Antonio, a 11 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, Braulio Martín.

2132

Alcaldía de Valleruela de Sepúlveda

Don José Barrio Gilarranz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de este pueblo de Valleruela de Sepúlveda.

Hago saber: Que la cobranza del repartimiento general de utilidades correspondiente al cuarto trimestre del año actual, se verificará en este término durante los días 23 y 24 del mes actual por los recaudadores nombrados al efecto D. Lucio y don Juan Barrio, cuya oficina está situada en la Casa Consistorial y permanecerá abierta desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde; advirtiéndose que también se admitirán las cantidades que se adeuden correspondientes a trimestres anteriores.

En consecuencia, invito a los contribuyentes por el expresado concepto a que verifiquen en dicho plazo el pago de sus respectivas cuotas en referida oficina recaudatoria de esta localidad o antes del día 10 del próximo mes de Diciembre en dicha oficina; pues de lo contrario, incurrirán, sin más notificación ni requerimiento, en el único grado de apremio, pero si pagan sus descubiertos del día 21 al final de referido mes de Diciembre, el recargo de apremio se limitará al diez por ciento del importe de descubierto, todo conforme al estatuto de recaudación fecha 18 de Diciembre.

Dado en Valleruela de Sepúlveda a 7 de Noviembre de 1931.—El Alcalde, José Barrio.

CRÉDITO**HIPOTECARIO ESPAÑOL**

COMERCIAL REGISTRADO EN EL MINISTERIO
DE FOMENTO AÑO 1924

Préstamos hipotecarios amortizables a comodidad

Cancelación y pignoración de hipotecas

*Créditos a propietarios que no tengan las fincas
hipotecadas*

Oficina Central - técnico administrativa

Calle del Doctor Martí y Juliá, 4 pral.-Barcelona

(Junto a la Vía Layetana y frente al Palacio del Banco de España)

Hay Ascensor

Deseamos nombrar Delegados en las poblaciones de España

donde no tenemos delegaciones

IMPRENTA PROVINCIAL



Suplemento al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de SEGOVIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION

DECRETO

Como Presidente del Gobierno de la República, de acuerdo con el mismo y a propuesta del Ministro de Trabajo y Previsión,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la ejecución de la ley de Cooperativas.

Dado en Madrid, a dos de Octubre de mil novecientos treinta y uno.—Niceto Alcalá-Zamora y Torres.—El Ministro de Trabajo y Previsión, Francisco L. Caballero.

Reglamento para la aplicación de la ley de Cooperativas

CAPITULO PRIMERO

NATURALEZA, PERSONALIDAD Y CONDICIONES GENERALES DE LAS COOPERATIVAS

Artículo 1.º Para todos los efectos legales se entenderá por Sociedad cooperativa la Asociación de personas naturales o jurídicas que sujetándose en su organización y en su funcionamiento a las prescripciones legales y tendiendo a eliminar el lucro, tenga por objeto satisfacer alguna necesidad común, procurando el mejoramiento social y económico de los asociados mediante la acción conjunta de éstos en una obra colectiva.

Son condiciones legales necesarias para todas las cooperativas:

1.ª Estar regidas con plena autonomía dentro de lo legislado, por sus propios estatutos y los acuerdos de la Asamblea general.

2.ª Igualdad del derecho de voto para todos los socios.

No obstante, podrán establecerse mínimos de edad o de antigüedad cuando los estatutos sociales lo consignent así expresamente. Únicamente en las cooperativas clasificadas como profesionales podrán establecerse por los estatutos que algunos socios tengan hasta un máximo de tres votos, según la cuantía de su participación en las operaciones sociales, pero siempre con independencia del capital aportado y sin que la pluralidad de votos sea aplicable a los asuntos de índole personal.

3.ª Que ninguna función directiva o de gestión está vinculada en persona o entidad determinada, ni sea delegada en empresa gestora alguna.

4.ª Que las participaciones en el capital social no sean transferibles sino entre los socios, con los requisitos que se fijen, y que en caso de atribuirseles algún interés, tenga éste un límite previamente fijado y nunca superior al interés legal.

5.ª Que en caso distribuir los excedentes, se haga el reparto proporcionalmente a la participación de cada asociado en las operaciones sociales.

Artículo 2.º El número de socios no será inferior a veinte, salvo en los casos en que legal o reglamentariamente se establezca un mínimo distinto para las Sociedades de alguna clase determinada.

No podrá limitarse el crecimiento

del número de socios ni estatutariamente ni de hecho, salvo en las cooperativas de trabajadores y en las de la vivienda, y las que, en casos muy justificados obtengan autorización del Ministerio de Trabajo, de acuerdo con el informe de la Subcomisión especial correspondiente del Consejo de Trabajo.

Artículo 3.º Nadie podrá pertenecer a una Sociedad cooperativa en concepto de empresario, contratista, socio capitalista u otro análogo.

No podrá haber acciones preferentes, ni partes de fundador, ni combinación alguna que tienda a asegurar privilegios o ventajas especiales a determinadas personas, siendo nulo todo acto o acuerdo en contrario.

Artículo 4.º Las Sociedades cooperativas tendrán plena personalidad jurídica propia. Podrán adquirir, poseer y enajenar bienes y derechos, contraer obligaciones, ejercitar acciones civiles y criminales y realizar todos aquellos actos que sean conducentes al cumplimiento de sus fines y a la defensa de sus intereses, conforme a las leyes y a las reglas de su constitución.

Artículo 5.º Las Sociedades cooperativas pueden ser:

a) Cooperativas de responsabilidad limitada, de cuyos compromisos y obligaciones responde sólo el haber social.

b) Cooperativas de responsabilidad suplementada, en las que los socios pueden constituir una garantía suplementaria con un máximo fijado de antemano.

c) De responsabilidad limitada, en las que cada socio responde con la totalidad de sus bienes.

Las Cooperativas de consumidores no podrán constituirse con la condición de responsabilidad ilimitada.

Las personas jurídicas no podrán formar parte de una Cooperativa con responsabilidad ilimitada.

Artículo 6.º El uso de la denominación de cooperativas corresponde exclusivamente a las Sociedades clasificadas como tales con arreglo al presente decreto. Ninguna otra asociación, sociedad, compañía o establecimiento podrá usar en su denominación subtítulos, rótulos, etiquetas, membretes, anuncios, ni en documento alguno la palabra «Cooperativa» ni otra de sentido análogo o que se preste a confusión.

CAPITULO II

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 7.º El registro de Cooperativas se llevará en el servicio correspondiente del Ministerio de Trabajo, el cual tramitará en general, y salvo atribuciones expresas a otro organismo, los asuntos referentes a la ejecución de las disposiciones legales sobre cooperación.

Las resoluciones sobre clasificación, calificación y modificación de Cooperativas se dictarán por la Dirección general con informe de la Subcomisión especial correspondiente del Consejo de Trabajo.

La resolución de recursos corresponde al Ministerio, oyendo a la mencionada Subcomisión.

Artículo 8.º Encargada del estudio, preparación y difusión de las disposiciones con la cooperación relacionadas, seguir la marcha del movimiento cooperativo, difundir el conocimiento de los hechos, los principios y la técnica de la cooperación y fomentar su desarrollo en España, funcionará, dentro del Consejo de Trabajo, una Subcomisión especial asistida de una sección correspondiente de la Asesoría general de dicho Consejo.

Dicha subcomisión administrará el fondo para difusión y enseñanza de la cooperación.

Artículo 9.º Con el fin de abreviar trámites, el Registro pasará directamente a la Subcomisión especial, para el oportuno informe, la documentación de las Sociedades que soliciten su inclusión a la aprobación de reforma de los estatutos.

De igual modo le facilitará directamente los datos e informes que la Subcomisión necesite para sus trabajos.

Artículo 10. Los informes sobre calificación y clasificación de Cooperativas de la Subcomisión especial pasarán desde luego directamente al Ministerio, salvo cuando alguno de los Vocales de ésta solicite que sea previamente sometido a la Comisión permanente del Consejo de Trabajo.

Artículo 11. La Subcomisión del Consejo de Trabajo, en la medida más amplia que permitan los medios de que disponga, hará una intensa labor de difusión y divulgación, utilizando la imprenta, las proyecciones, la radiodifusión y demás medios auxiliares.

Organizará por sí o de acuerdo con algún otro Centro oficial o con las organizaciones cooperativas y con la aprobación del Ministerio de Trabajo las enseñanzas especiales y complementarias que en cada ocasión parezcan más convenientes, atendiendo de un modo señalado a la formación de los futuros Profesores de cooperación y de los Directores e Inspectores de Cooperativas.

Podrá también organizar la enseñanza ambulante, prestar ayuda a los Centros deseosos de dar cursos breves o lecciones especiales sobre cooperación y contribuir a la organización y celebración de Concursos, Exposiciones, Conferencias y Congresos, por propia iniciativa o secundando iniciativas ajenas.

Artículo 12. El fondo para la difusión y enseñanza de la Cooperación se nutrirá:

1.º Con las cantidades que de derecho le correspondan, con arreglo a las disposiciones legales.

2.º Con las aportaciones y subvenciones del Estado y de las Corporaciones.

3.º Con las aportaciones voluntarias, donativos y legado de las Cooperativas, Asociaciones y Sociedades de todas clases y de los particulares.

4.º Con el producto de las publicaciones editadas con cargo al fondo y a las cuales se fije un precio módico, a fin de estimular su mejor utilización y evitar el despilfarro.

5.º Con cualquier otro ingreso lícito que el Consejo de Trabajo acepte o el Ministerio autorice.

Artículo 13. Con cargo al fondo para la difusión y enseñanza de la Cooperación sólo se podrán abonar servicios y gastos que respondan estricta y directamente a tales fines y de ningún modo servicios de carácter administrativo ni material de oficina, aun cuando se relacione con la difusión y enseñanza de la cooperación.

Artículo 14. En el Consejo de Trabajo se organizará el servicio de consultorio para contestar directamente, sin comprometer el criterio de la Corporación, las dudas y consultas que sobre puntos de legislación y organización cooperativas le sean sometidas.

Redactarán también estatutos-tipo para las clases de Sociedades más frecuentes, reglamentos interiores, modelos de documentación, etc., para que puedan servir de orientación y guía a las Cooperativas, pero sin que en momento alguno sea obligatoria su aceptación.

Artículo 15. Las Autoridades y dependencias oficiales de todo orden están obligadas a facilitar los servicios de Cooperación del Ministerio y del Consejo de Trabajo y a los Inspectores de Cooperativas, los datos y antecedentes que les pidan y puedan contribuir al mejor desempeño de su cometido.

CAPITULO III

REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE COOPERATIVAS

Artículo 16. Las personas que traten de constituir una Cooperativa lo comunicarán al Registro, acompañando tres copias de los estatutos o reglamentos por los cuales haya de regirse. La comunicación y las copias de los estatutos o reglamentos habrán de estar suscritas por cinco o más individuos mayores de edad, con expresión de las respectivas profesiones y domicilios, salvo lo especialmente dispuesto para las Cooperativas escolares.

Examinados los estatutos o reglamentos, se hará la clasificación provisional de la futura Cooperativa o se formularán los reparos que procedan.

Si los organizadores insistieren, sin explicación satisfactoria, en alguno de los puntos reparados, se denegará la admisión.

Se tendrá por desistida la petición si los iniciadores dejan transcurrir más de un mes sin atender o contestar los reparos.

Artículo 17. Durante los tres meses siguientes a la aprobación de los estatutos, podrá celebrarse la sesión de constitución, desde cuya fecha comenzará a contarse la duración de la Sociedad. En el acta de constitución se consignarán los nombres de los elegidos o designados para formar la primera Junta directiva.

Dentro del plazo de seis días se remitirá al Registro una copia del acta de constitución, autorizada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea y un número de fundadores asistentes al acto que no baje de seis.

Recibida el acta de constitución y

resultando todo conforme con las prescripciones legales, se hará la clasificación definitiva y la correspondiente inscripción en el Registro.

Artículo 18. Contra el acuerdo denegando la admisión de los estatutos, o la inscripción en el Registro y contra la clasificación provisional o la definitiva, podrá recurrirse en el plazo de veinte días ante el Ministerio, el que resolverá oyendo al Consejo de Trabajo.

Artículo 19. La inscripción en el Registro de Cooperativas será gratuita.

Las certificaciones que hayan de ser expedidas por el Registro, se extenderán en papel común.

La copia diligenciada del acta de constitución y de los estatutos, con la anotación de inscripción equivaldrá, para todos los efectos legales, a una escritura pública.

Artículo 20. El Registro clasificará a las Cooperativas en los siguientes grupos fundamentales:

1. Cooperativas de consumidores.
2. Cooperativas de productores.
- a) De trabajadores.
- b) Profesionales.
3. Cooperativas de crédito, de ahorro y de seguros.
4. Cooperativas mixtas e indeterminadas.

Artículo 21. Entre las Cooperativas de consumidores se distinguirá:

- 1.º Cooperativas distributivas o de consumo.
- 2.º Cooperativas de suministros especiales (agua, gas, energía eléctrica, etcétera.)
- 3.º Cooperativas sanitarias (socio, asistencia médico-farmacéutica, hospitalización, enterramientos.)
- 4.º Cooperativas de servicios diversos (alojamientos, restaurantes, enseñanza, transportes, etc.)
- 5.º Cooperativas de la vivienda.

Artículo 22. Las Cooperativas profesionales, atendiendo a la naturaleza de la industria ejercida o servida, se subdividirán en la siguiente forma:

- 1.º Agrícolas, pecuarias y forestales.
- 2.º Pesqueras y de servicios marítimos.
- 3.º Mineras y minero-metalúrgicas.
- 4.º De producción industrial.
- 5.º De la construcción.
- 6.º De transportes y comunicaciones.
- 7.º Comerciales.
- 8.º De servicios y profesiones diversas.
- 9.º Mixtas e indeterminadas.

Artículo 23. A propuesta del Consejo de Trabajo podrá establecerse algún nuevo grupo de Cooperativas o modificar la subdivisión de los ya establecidos.

También podrá adoptarse otras clasificaciones, con el carácter de auxiliares, cuando así convenga para determinados fines y, en particular, para facilitar la comparación con las estadísticas de otros países.

Artículo 24. Cuando alguna Cooperativa ejerza simultáneamente funciones diversas, se clasificará atendiendo a la que predomine claramente sobre las demás. Si ninguna función estuviere en este caso, se clasificará a la Sociedad como Cooperativa mixta.

Las Cooperativas de consumidores no perderán su condición de tales porque produzcan las cosas necesarias para sí, para sus asociados o para otras Cooperativas concertadas.

Artículo 25. A cada Cooperativa se le incluirá en un solo grupo de la clasificación fundamental. Podrá ser

incluida en dos o más de las subdivisiones correspondientes.

Artículo 26. Dentro de cada división se distinguirá a las Cooperativas según que sean de responsabilidad limitada, suplementada o ilimitada, y según que tengan o no la condición de populares.

Las organizaciones de segundo grado se clasificarán en sección especial, dentro de cada clase, según la naturaleza de las Cooperativas que las formen.

Entre las Cooperativas de productores se hará anotación especial de las que de una manera exclusiva o muy predominante se dediquen a la venta de productos o al suministro de los asociados de instrumental y primeras materias.

Artículo 27. Se cancelará la inscripción en el Registro de las Sociedades acerca de las cuales no conste que comenzaron sus operaciones en los doce meses siguientes a su constitución o las interrumpieron durante seis meses consecutivos.

CAPITULO IV

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE LAS COOPERATIVAS EN GENERAL

Artículo 28. En los estatutos de las Cooperativas habrán de consignarse claramente los siguientes particulares:

Denominación, objeto y duración de la Sociedad.

Localidad en que radique el domicilio social.

Expresión de si se constituye con la condición de responsabilidad limitada, suplementada o ilimitada.

Derechos y deberes de los socios y condiciones para su admisión, cesación y exclusión.

Régimen de administración y gobierno de la Sociedad, expresando el procedimiento que haya de seguirse para la convocatoria y celebración de las Asambleas generales.

Medios económicos de que haya de valerse la Cooperativa y forma de constituir el fondo social.

Aplicación que haya de darse a los rendimientos de cada ejercicio.

Casos de disolución, procedimientos que deban seguirse para llevarla a efecto y aplicación que haya de darse al haber social líquido.

Artículo 29. Las Cooperativas adoptarán libremente su denominación social, cumpliendo con los siguientes requisitos.

1.º Que la denominación adoptada no induzca a error respecto a la naturaleza y condiciones de la Sociedad.

2.º Que no coincida con la denominación de otra Sociedad anteriormente registrada en la misma provincia, ni sea tal que se preste a confusión.

Artículo 30. Las Cooperativas registradas deberán hacer constar su condición de tales en sus rótulos, etiquetas y anuncios y en todo documento que haya de surtir efecto para con terceros.

Artículo 31. Los mayores de dieciséis años no necesitan la autorización expresa de sus padres, tutores o procuradores, ni la mujer casada necesita la licencia del marido para formar parte de una Cooperativa de responsabilidad limitada, intervenir en las operaciones sociales y abonar o percibir las cantidades que estatutariamente les correspondan.

Artículo 32. Los asociados en una Cooperativa podrán retirarse de ella dando aviso por escrito con la antelación que impongan los estatutos, y

que en las Cooperativas de consumidores no podrá exceder de un mes. No obstante, quedarán sujetos a la liquidación de las obligaciones y responsabilidades contraídas al tiempo de la separación.

Únicamente en las Cooperativas calificadas como profesionales se podrá establecer el compromiso de permanecer en la Asociación y participar en las operaciones sociales por plazo superior a un año.

Artículo 33. En ningún caso podrá exigirse responsabilidad alguna a los socios de una Cooperativa por razón de los compromisos y obligaciones sociales después de pasados dos años de su separación o exclusión o de la disolución de la Sociedad.

Artículo 34. Cuando un socio sea baja en la Sociedad, se le liquidará su participación en el haber social y se le abonará el saldo que a su favor resulte en la forma y plazos que los estatutos determinen, si la participación no estuviere sujeta a la liquidación de responsabilidades pendientes.

Caso de que los estatutos establezcan que el reintegro de la participación se haga con alguna deducción, ésta no podrá nunca ser superior al 20 por 100 del total importe suscrito y tampoco podrá exceder de lo desembolsado.

No podrá hacerse deducción alguna cuando la baja sea por fallecimiento.

Artículo 35. Los acreedores personales de un asociado no tendrán derecho alguno sobre los bienes de la Asociación ni sobre la participación del asociado en el haber social para obtener prenda o pago de lo que les sea debido.

Únicamente podrá solicitarse embargo o ejecución sobre las imposiciones voluntarias que hayan entrado a formar parte del capital social, y la Cooperativa dispondrá para satisfacer las correspondientes cantidades, de los mismos plazos de que dispondría si hubiera de reintegrarlas al asociado.

Artículo 36. En el caso de que la participación de los asociados en el capital social de la Cooperativa esté representada por acciones, éstas serán nominativas y de un valor no superior a 100 pesetas cada una.

Artículo 37. Un 10 por 100, cuando menos, de los rendimientos de cada ejercicio se aplicará a la formación de un fondo de reserva colectivo hasta alcanzar una suma igual a la de los capitales individuales que los socios hayan aportado con carácter forzoso a menos de que las leyes y reglamentos impongan en este particular mayor obligación para las Cooperativas de alguna clase o carácter y salvo lo que en el mismo sentido establezcan los estatutos sociales.

Artículo 38. En toda Cooperativa habrá una Junta directiva, formada por cinco individuos cuando menos.

La elección y renovación se hará según determinen los estatutos sociales, sin que ningún cargo de la Junta directiva pueda ser desempeñado por la misma persona más de cuatro años consecutivos.

Artículo 39. En las Cooperativas de más de cien socios será obligatorio el funcionamiento de una Comisión de inspección de cuentas, formada por tres o más individuos, elegidos anualmente por la Junta general.

Las Cooperativas cuyo número de socios no exceda de ciento podrán libremente establecer o no dicha Comisión y fijar el número de sus individuos.

La Comisión inspectora podrá convocar por sí a la Junta general en los casos que considere graves y de urgencia.

Artículo 40. Las designaciones para las Juntas o Consejos directivos y Comisiones especiales y todo género de autorizaciones y mandatos para actuar en nombre de la Sociedad serán revocables por acuerdo de Asamblea general, sin que pueda prevalecer pacto en contrario.

Artículo 41. Las Cooperativas llevarán su contabilidad y sus registros con arreglo a las instrucciones y modelos aprobados por el Ministerio de Trabajo, a propuesta del Consejo de Trabajo, tendiendo siempre a la mayor claridad y sencillez posibles para cada clase de Cooperativas.

Artículo 42. En las Cooperativas de más de 1.000 socios o cuyo territorio comprenda varias localidades con distancias de 50 o más kilómetros, podrán los estatutos sociales autorizar la celebración de asambleas de segundo grado.

Artículo 43. En las asambleas de segundo grado no se podrán tomar acuerdos de carácter general y obligatorio cumplimiento para lo sucesivo sobre asuntos que no hayan sido previamente discutidos en las reuniones primarias de los grupos, secciones o delegaciones correspondientes.

En las reuniones primarias los partidarios de cada solución o tendencia podrán designar un delegado, el cual tendrá en la asamblea de segundo grado tantos votos como correspondan en junto a quienes le hayan otorgado su representación.

Artículo 44. Los estatutos de las Cooperativas podrán prohibir el voto por delegación o autorizarlo. La delegación, cuando proceda, deberá recaer en un asociado. Cada asociado no podrá representar a más de otros tres, salvo lo establecido para las asambleas de segundo grado.

No podrán votar por delegación ni los miembros de la Junta directiva ni los socios que sean al mismo tiempo empleados de la Sociedad.

Artículo 45. Las Cooperativas podrán imponer a sus asociados multas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los estatutos. Estas exacciones habrán de ser de cuantía moderada. La mitad, cuando menos, del total importe de las impuestas en cada semestre se destinarán al fondo central para difusión y enseñanza de la cooperación. El resto se aplicará al fondo de reserva irrepartible de la Cooperativa.

Si los estatutos lo autorizan de una manera expresa, las Cooperativas que no tengan la condición de populares podrán también exigir cuotas de entrada irreivindicables, cuyo importe se destinará íntegramente al fondo de reserva irrepartible.

Artículo 46. El Ministerio, a propuesta del Consejo de Trabajo, publicará una lista de las obras sociales oficialmente aprobadas y que las Cooperativas sin más autorización podrán sostener o contribuir a sostener con fondos de inversión obligatoria, siempre que cumplan los requisitos que para cada obra se fijen.

Las Cooperativas podrán en todo tiempo solicitar la aprobación de alguna otra obra social. Caso de merecer la aprobación se publicará para que sea considerada como incluida en la lista. Esta se publicará refundida siempre que sea preciso y cuando menos una vez cada dos años.

Con fondos de libre disposición podrán las Cooperativas sostener las

obras sociales que prefieran, figuren o no entre las oficialmente aprobadas.

Artículo 47. Las Cooperativas podrán admitir de sus asociados imposiciones voluntarias funcionando como Caja de Ahorros, sujetándose en la cuantía de las imposiciones y en el interés abonado a los límites que haya establecidos para las Cajas de Ahorro de patronato del Gobierno.

Las cantidades así reunidas podrán emplearse como fondo de movimiento de la Cooperativa, y la mitad cuando menos, en operaciones que permitan la fácil realización en plazo no superior a un mes. La parte no invertida con estas limitaciones podrá invertirse en valores que figuren en la lista de los aprobados por el Ministerio de Trabajo.

Artículo 48. Cuando las Cooperativas hagan préstamos en dinero a los socios, no cobrarán título de premio, prima o con otro nombre, suma alguna que reduzca la cantidad efectiva prestada a menos del importe nominal del préstamo, salvo el descuento por abono anticipado de intereses, si así se hubiere establecido.

El tipo de interés no podrá exceder del máximo que tenga fijado el Ministerio de Trabajo, y no podrá ser aumento durante la vigencia del préstamo.

Artículo 49. Las Cooperativas están obligadas:

1.º A remitir al Registro dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada ejercicio social una copia de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

2.º A comunicar, dentro del plazo de quince días, todas las alteraciones habidas en sus organismos directivos. Cuando se trate de Sociedades de responsabilidad ilimitada, comunicarán también las altas y bajas de los socios.

3.º A comunicar verazmente los datos que oficialmente les sean pedidos para fines fiscales o estadísticos.

4.º A facilitar la inspección hecha por funcionario competente y darle entrada y acceso a todos los locales y dependencias de la Cooperativa.

5.º A proveerse de un libro de visitas que estará siempre a disposición de los Inspectores para que puedan consignar las diligencias que procedan.

CAPÍTULO V

MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Artículo 50. Las modificaciones en los estatutos de las Cooperativas no podrán acordarse sino en asamblea general extraordinaria especialmente convocada al efecto, con el mínimo de asistencia y número de votos conformes que los mismos estatutos señalen.

La modificación no entrará en vigor mientras no se haya hecho la correspondiente anotación en el Registro, aplicándose a este caso, con la conveniente adaptación, el procedimiento y plazos establecidos para la primitiva inscripción.

Si la modificación envolvere alguna nueva obligación o responsabilidad para los socios podrán retirarse de la Cooperativa en plazo de un mes los socios que hayan votado en contra de la reforma, sin que pueda prevalecer acuerdo o pacto en contrario, y siempre sin perjuicio de las responsabilidades contraídas.

Toda modificación de los estatutos que afecte a la responsabilidad para con terceros, se entenderá hecha sin

perjuicio de los compromisos contraídos.

Artículo 51. Las Cooperativas se disolverán:

Por resolución de Autoridad competente con arreglo a la ley.

Por ocurrir cualquier suceso que esté señalado en los estatutos como determinante de la disolución.

Por haberse reducido el número de socios a menos del legalmente necesario para que la Sociedad pueda subsistir.

Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria, con las garantías y requisitos que los estatutos exijan y que nunca serán menores que los necesarios para la modificación de los mismos estatutos.

Artículo 52. Cuando se disuelva una Cooperativa, la designación de liquidadores se hará según prescriban los estatutos. Si pasado un mes, a partir del acuerdo de disolución, no hubieren comenzado las operaciones de liquidación, cualquiera que sea el motivo, o se interrumpieren por más de ese tiempo después de comenzadas o se llevaran con lentitud maliciosa, el Ministerio, a petición de un número de socios que no baje de la quinta parte del total, o a propuesta de la Subcomisión especial del Consejo de Trabajo, podrá designar uno o varios comisarios encargados de ultimar lo más rápidamente posible las operaciones de liquidación.

Artículo 53. Al liquidar una Cooperativa no podrá adjudicar a ningún socio valor superior al que le correspondiera si él se hubiera separado voluntariamente de la Sociedad, continuando ésta su funcionamiento.

Las cantidades procedentes de los fondos de reserva obligatorios no podrán ser repartidos entre los socios en ningún caso. Se adjudicarán a la obra cooperativa de enseñanza o de beneficencia que la asamblea general acuerde, siguiendo las normas que establezcan los estatutos sociales.

Todas las cantidades acerca de cuyo destino no se haya resuelto oportunamente y en buena y debida forma, se aplicarán al fondo para la difusión y la enseñanza de la cooperación.

Artículo 54. Las cantidades procedentes de los fondos de reserva irrepartibles de las Cooperativas populares y asimiladas, no podrán adjudicarse sino a otra entidad cooperativa que esté también calificada como popular, y que al tiempo de disolverse la Cooperativa donante, lleve, a lo menos, un año de funcionamiento no interrumpido. La aplicación de dichas cantidades no podrá ser otra que la de acrecentar su fondo de reserva irrepartible.

Artículo 55. El último Presidente de toda Cooperativa, Concierto, Unión o Federación de Cooperativas que se disuelva, estará obligado a dar cuenta de ello al Registro, dentro del plazo de ocho días, a partir del acuerdo de la disolución.

Igualmente se deberá comunicar toda interrupción de las operaciones sociales que dure más de cuatro meses.

A falta de Presidente, las obligaciones a que este artículo se refiere corresponden por el orden que se indica, al Vicepresidente, al Secretario y a todos los individuos de la última Junta directiva. Cuando se trate de organizaciones cooperativas escolares, la obligación alcanzará también a los Jefes del establecimiento en que radiquen.

CAPÍTULO VI

INSPECCIÓN

Artículo 56. Las Cooperativas ha-

brán de ser inspeccionadas, a lo menos, una vez cada tres años, sin perjuicio de las visitas extraordinarias que puedan ser precisas.

La inspección podrá hacerse:

1.º Por Inspectores especiales de nombramiento ministerial a propuesta de la Subcomisión de cooperación.

2.º Por Inspectores temporales autorizados para casos concretos y determinados o por plazo no superior a seis meses. Estos Inspectores habrán de ser funcionarios técnicos del Ministerio o del Consejo de Trabajo.

En caso de especial importancia podrán nombrarse Comisiones inspectoras formadas por dos Vocales de la Subcomisión del Consejo de Trabajo, asistidos en caso necesario, por un funcionario administrativo o técnico.

Artículo 57. Las personas autorizadas para la inspección de Cooperativas serán conceptuadas como autoridades públicas a los efectos de la responsabilidad imputable a quien cometa atentado contra ellas o las haga objeto de actos o palabras ofensivas para su prestigio, ya en actos del servicio, ya fuera de él, pero con motivo de él.

Artículo 58. La inspección de Cooperativas se hará con criterio más preventivo que represivo. Los Inspectores, prestando su asesoramiento en la medida más amplia posible en cada caso, ayudarán a las Cooperativas a evitar el incurrir en infracción.

Artículo 59. Los Inspectores no podrán, bajo pena de exoneración y sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiera lugar:

1.º Inspeccionar Cooperativas de que sean socios.

2.º Comunicar a extraños los actos de las Sociedades de que tengan conocimiento por razón de sus funciones inspectoras.

3.º Ejercer fuera de las funciones públicas, profesión lucrativa en asuntos relacionados con las Sociedades inspeccionadas.

Artículo 60. Para la imposición de sanciones regirán las siguientes normas de procedimiento:

1.º El Inspector que observare alguna infracción extenderá la correspondiente acta y hará la oportuna consignación en el libro de visitas. En el acta se hará constar la denominación y domicilio de la Cooperativa, circunstancias de la infracción y disposición infringida.

El acta, aun sin la firma del representante de la Cooperativa visitada, se considerará como documento probatorio de los puntos de hecho observados por el Inspector, salvo demostración en contrario.

2.º El acta de infracción se enviará a la Delegación provincial del Consejo de Trabajo en unión de un oficio en que se haga la exposición sucinta del caso y se señale la sanción procedente a juicio del Inspector. Se enviará una copia del acta a la Cooperativa para que ésta pueda enviar a la Delegación provincial el escrito de descargo en el plazo de diez días.

3.º La Delegación formará el oportuno expediente, podrá practicar las comprobaciones que considere adecuadas y adoptará su resolución en el plazo máximo de treinta días hábiles a partir del recibo de la comunicación del Inspector.

La resolución será notificada a la entidad interesada por correo certificado, o si fuera preciso, por medio de la Alcaldía correspondiente. De ella se enviará también traslado al Inspector denunciante y al Consejo de Trabajo.

Artículo 61. Contra el acuerdo de la Delegación cabe recurso ante el

Ministerio con arreglo a las siguientes normas:

1.º La persona o entidad multada podrá presentar el recurso en la Delegación provincial en el plazo de quince días a partir de la notificación de la multa, con la prueba documental que se aduzca, así como el interrogatorio y lista de testigos, si se quisiera utilizar esta prueba.

2.º La Delegación provincial lo remitirá todo con su informe al Consejo de Trabajo. Si fuera admitida la prueba testifical se pedirá su práctica al Juzgado municipal correspondiente.

3.º Una vez completas las actuaciones, la Subcomisión del Consejo de Trabajo formulará un proyecto de resolución que será elevado al Ministerio para el correspondiente acuerdo.

4.º No se admitirá el recurso si no se acompaña copia literal del documento justificativo de haberse depositado en la Caja Central de Depósitos en la sucursal de la provincia o en cualquiera otra dependencia oficialmente autorizada para ello el importe de la multa más el 20 por 100.

Con el 20 por 100 adicional se atenderá, hasta donde alcance su importe, a las costas que se produzcan en el Juzgado municipal, siendo de aplicación los aranceles para la exacción de multas gubernativas. El sobrante de este 20 por 100, si lo hubiere, acrecerá la multa y se ingresará en el fondo para difusión y enseñanza de la cooperación.

5.º El Inspector denunciante podrá también recurrir contra el acuerdo de la Delegación si fuere desestimando la multa o reduciendo la propuesta por aquél.

6.º Contra la resolución del Ministerio no se dará recurso alguno, ni en vía gubernativa ni en lo contencioso-administrativo.

La notificación se hará por medio de la Alcaldía correspondiente. Cuando el caso pueda servir de ejemplo se publicará la resolución en la *Gaceta de Madrid*.

Artículo 62. Caso de no recurrir contra la sanción, los multados, remitirán directamente el importe de las multas al Consejo de Trabajo, dentro del plazo para interponer el recurso.

Si así no lo hicieren, se pasará la oportuna comunicación al Juzgado correspondiente para que proceda por vía de apremio a fin de hacer efectivos el importe de la multa y las costas.

Análogamente se procederá cuando, interpuesto recurso por el Inspector, se resuelva imponer multa anteriormente dosificada o aumentar su cuantía. En tal caso, el plazo de que dispondrá el multado para satisfacer la cantidad correspondiente sin exacción de costas será el de quince días, a contar de la notificación de la resolución.

Artículo 63. Cuando, interpuesto recurso por el multado, se confirme en todo o en parte la multa propuesta, se comunicará a la Caja de Depósitos o a la Dependencia donde se hubiere depositado el importe de la multa, para que haga el correspondiente envío al Consejo de Trabajo.

Si la multa fuere revocada, las costas que se hayan producido en los Juzgados se declararán de oficio y se extenderá la oportuna orden de devolución del depósito.

CAPÍTULO VII

SANCIONES

Artículo 64. Incurrirán en multa de 25 a 250 pesetas las Cooperativas

que no remitan al Registro o a la dependencia que proceda los documentos prescritos por las disposiciones legales y las que no faciliten los datos que le sean pedidos por dependencia o funcionario competentes.

Si los facilitase inexactos intencionalmente o por negligencia punible, la multa será de 50 a 500 pesetas.

Artículo 65. Incurrirán en multa de 50 a 500 pesetas las Cooperativas que no consignen su condición de tales en los contratos con terceros y en los documentos de toda clase destinados a la publicidad, y las que operen con una denominación social distinta de la registrada.

Artículo 66. Incurrirán en multa de 100 a 1.000 pesetas:

Las Cooperativas que falten a las restricciones o limitaciones impuestas a sus operaciones por las disposiciones legales o por sus propios estatutos.

Las Cooperativas de consumidores que teniendo establecida la norma de no servir al público falten a ella o adopten artificios encaminados a facilitar la prestación o transferencia de servicios y artículos a terceras personas.

Las Cooperativas que pongan dificultades al servicio de inspección.

Cuando se compruebe que la infracción ha sido cometida por algún empleado o agente de la Cooperativa, contraviniendo las órdenes de sus superiores, el límite inferior de la multa podrá reducirse a la mitad, y la sanción recaerá sobre el empleado o agente infractor, siendo la Cooperativa subsidiariamente responsable del pago.

Artículo 67. Podrán ser declarados incurso en infracción, con imposición de multa de 25 a 500 pesetas:

Los miembros del organismo directivo de la Sociedad que en las memorias, estados de cuentas o comunicaciones a la Asamblea general sometieren inexactitud intencionada o expusieren deliberadamente los hechos en forma tal que induzca a error acerca de la verdadera situación de la Cooperativa.

Los individuos de la Comisión de inspección de quienes se compruebe que han hecho dejación de sus funciones o las han ejercido con negligencia.

Los Directores de la Cooperativa, cualquiera que sea la denominación del cargo, que por sí o por instrucciones comunicadas a sus subordinados impidan el ejercicio de algún derecho que esté reconocido a los socios por disposición legal o por los estatutos sociales.

Artículo 68. Por toda infracción de las disposiciones legales referentes a las Cooperativas que no tengan señalada sanción especial, podrá imponerse multa de 25 a 200 pesetas.

Artículo 69. Las sanciones consignadas en los artículos anteriores podrán ser reducidas a un apercibimiento cuando se aprecie que no hubo deliberado propósito de faltar a lo dispuesto, sino simplemente ignorancia o negligencia no grave.

Para ello será precisa instancia del interesado reconociendo la falta y renunciando a todo otro recurso.

Esta reducción para la misma o análoga infracción no podrá repetirse en favor de una persona jurídica hasta pasados dos años, y en ningún caso en favor de los individuos.

Artículo 70. En casos de reincidencia se duplicará la cuantía de los límites señalados para las multas en los artículos anteriores.

Si la reincidencia fuere repetida,

podrá, además, retirarse a las Cooperativas infractoras, hasta por un año de plazo, los beneficios de las calificaciones hechas a su favor.

Artículo 71. Toda sociedad inscrita en el Registro de Cooperativas que, aun cumpliendo en lo externo con los requisitos impuestos a las de su clase encamine su funcionamiento a realizar o servir cualquier combinación lucrativa, será requerida, dándole un plazo prudencial, no superior a treinta días, para que ponga el oportuno remedio. Si no lo hiciere así, o si reincidiere, podrá, con informe del Consejo de Trabajo, serle retirada la calificación de Cooperativa, temporal o definitivamente, atendiendo a las circunstancias del caso y sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

Artículo 72. Se impondrá multa de 100 a 1.000 pesetas a las Sociedades y a los dueños y directores de establecimientos y Empresas que ostenten indebidamente la condición de Cooperativas o contravengan en cualquier forma a lo dispuesto en el artículo 6.º del decreto de 4 de Julio de 1931 y disposiciones concordantes o las que le sustituyan.

En caso de reincidencia, la multa será de 200 a 2.000 pesetas, y los infractores podrán ser condenados a publicar a sus expensas el fallo en los periódicos, en número no superior a tres, que en el mismo fallo se ordene.

Artículo 73. La cuantía de las multas se determinará en cada caso atendiendo a la gravedad de la infracción y a la capacidad económica de las personas o entidades responsables. Su importe se destinará íntegro al fondo para difusión y enseñanza de la cooperación.

Artículo 74. Se considerará como reincidentes a los infractores que, habiendo sido castigados por una infracción, cometan otra de la misma índole.

Artículo 75. Será pública la acción para denunciar las infracciones del presente reglamento y demás disposiciones sobre el régimen de las Sociedades cooperativas.

Las denuncias podrán dirigirse al Ministerio, a la Subcomisión del Consejo de Trabajo o a persona autorizada para la inspección. Serán siempre consideradas como confidenciales y se guardará el mayor secreto acerca de su origen.

Artículo 76. La acción para perseguir las infracciones del presente reglamento y demás disposiciones sobre el régimen de las Sociedades cooperativas prescribirá a los tres años.

CAPITULO VIII

DE LAS FEDERACIONES, UNIONES Y CONCIERTOS DE COOPERATIVAS

Artículo 77. Las Cooperativas podrán constituir Uniones o Federaciones para defender sus intereses comunes y para la mejor realización de sus propios fines.

Podrán también formar Concierdos para la mejor realización de algunas operaciones de interés común. En estos Concierdos podrán entrar, cuando no se opongan a ello expresamente los términos de su constitución, las instituciones de beneficencia y las benéficosociales.

Ninguna Cooperativa podrá pertenecer simultáneamente a más de una Federación que persiga el mismo fin.

Artículo 78. Cinco o más Cooperativas locales o comarcales podrán constituir una Unión o una Federación provincial. Ocho o más Cooperativas locales o comarcales podrán

constituir una Unión o una Federación cuya acción se extienda a más de una provincia.

Tres o más entidades provinciales, interprovinciales y del distrito podrán constituir una entidad de orden superior.

Los Concierdos para fines determinados podrán constituirse por dos o más entidades cooperativas de la misma o diferente clase.

Artículo 79. Con la consiguiente adaptación y el necesario cambio de nombres se aplicará a las Federaciones, Uniones o Concierdos lo establecido respecto a la personalidad, registro, gobierno y disolución de las Sociedades cooperativas, relaciones con las dependencias oficiales, inspección, infracciones, exacciones, beneficios y saciones, siempre que no haya disposición especial que a las Federaciones, Uniones o Concierdos se refiera.

CAPITULO IX

COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES

Artículo 80. Serán consideradas como Cooperativas de consumidores las que tengan por objeto principal procurar, en las mejores condiciones posibles de calidad y precios, las cosas y servicios para el consumo o el uso de los asociados y sus familias.

Es condición necesaria de las Cooperativas de consumidores que el excedente de los rendimientos, después de atender al fondo de reserva y a obras sociales, se reparta, cuando haya lugar a su distribución, proporcionalmente al importe satisfecho por los asociados como pago de las cosas y servicios proporcionados por la Sociedad.

Artículo 81. Las Cooperativas de consumidores podrán servir al público, siempre que lo consigne así expresamente en sus estatutos y cumplan las condiciones que establezcan los reglamentos.

El exceso de percepción correspondiente a las operaciones que las Cooperativas de consumidores puedan, en su caso, hacer con el público no asociado y que no sea devuelto a los mismos compradores, no será jamás distribuido entre los socios, sino que se aplicará al fondo de reserva irrepartible y a obras sociales que figuren entre las oficialmente aprobadas.

Artículo 82. No se reputará que una Cooperativa de consumidores infringe la condición de no servir al público:

1.º Por servir a los socios de otra Cooperativa a título de reciprocidad.

2.º Por hacer con persona extraña las transacciones necesarias para liquidar saldos de artículos en que cese de operar o que desmerecerían considerablemente con una conservación prolongada.

3.º Por servir a Cooperaciones y aun al público en general, cuando lo haga por encargo de Autoridad competente y por motivos de utilidad pública.

Artículo 83. Las Cooperativas de consumidores tendrán representación en los organismos oficiales constituidos en su localidad para velar por el justo precio y la buena distribución de las subsistencias y servicios de mayor necesidad.

Las Federaciones provinciales, regionales y nacionales, tendrán la misma representación en los organismos provinciales, regionales o nacionales, respectivamente, que les correspondan, según su clase.

El Ministerio determinará en cada caso los organismos en que hayan de

estar representadas las demás clases de Cooperativas.

Artículo 84. Las Cooperativas de consumidores podrán abastecer directamente a sus asociados de carnes, pescados, verduras, frutas, leche y cualesquiera artículos que estén oficialmente declarados como de primera necesidad independientemente de todo concierto que los Ayuntamientos puedan tener hecho con otros abastecedores.

Artículo 85. Tendrán la consideración de Cooperativas populares las de consumo en cuyo estatuto se consigne la declaración de estar primordialmente constituidas para mejorar la condición económica y social de obreros y personas de medios modestos en general, encaminando a ello su funcionamiento y cumplimiento, además las siguientes condiciones:

El número de socios no podrá ser inferior a 200 en las poblaciones de más de 100.000 habitantes y a 75 en las capitales de provincia y poblaciones de más de 15.000 habitantes, y en ningún caso podrá tener más de un 5 por 100 de asociados, que por su condición económica no pueda considerarse de clase modesta.

La aportación obligatoria de cada socio para la formación del capital social no podrá exceder de 300 pesetas ni exigirse para el ingreso una primera entrega de más de 10 pesetas, disponiendo el cooperador para completar su aportación, del plazo que los estatutos señalen, no inferior a tres años, y siéndole de abono los excesos de percepción que puedan corresponderle.

Del exceso de percepción correspondiente a las operaciones hechas con los asociados se destinará un 50 por 100, cuando menos, al fondo de reserva irrepartible y a obras sociales que figuren entre las aprobadas oficialmente, sin que a ninguna de estas inversiones se pueda aplicar menos de un 10.

En caso de abonar algún interés a la participación de cada asociado en el capital social, el tipo correspondiente no podrá ser superior al que rija en las Cajas de Ahorro del Patronato del Gobierno.

Artículo 86. Las Cooperativas sanitarias podrán tener farmacias y laboratorios de productos farmacéuticos bajo la dirección, vigilancia y responsabilidad profesional de un titular colegiado.

Para que puedan tener farmacia deberán cumplir, además, con las condiciones siguientes:

Primera. Que no se abone interés al capital social ni se reparta exceso de percepción.

Segunda. Que los rendimientos de cada ejercicio, después de atender a la formación del fondo de reserva irrepartible, se destinen al mejoramiento de los servicios y a obras sociales de carácter sanitario.

Tercera. Que la Cooperativa esté constituida exclusivamente para fines de los atribuidos en el presente Decreto a las Cooperativas de su clase especial. La relación con las Cooperativas de otra clase podrá establecerse en el sentido de que la Cooperativa sanitaria reciba de ella subvención, auxilio o ayuda, pero nunca en sentido inverso.

Artículo 87. Las Cooperativas de la vivienda podrán, excepcionalmente, fijar un límite máximo al número de socios o constituirse con un número indefinido de grupos o secciones con número limitado de socios en cada una.

No podrán realizar operaciones ac-

tivas si no con sus socios o con otras Cooperativas concertadas, salvo autorización expresa del Ministerio en casos excepcionales.

CAPITULO X

COOPERATIVAS DE PRODUCTORES

Artículo 88. Serán consideradas como Cooperativas de trabajadores aquellas cuya finalidad primordial sea mejorar el rendimiento y las condiciones del trabajo personal de sus asociados: Contratando el trabajo en común de todos o de grupos de ellos; ejecutando en común obras, tareas o servicios para terceras personas o entidades; adquiriendo en común y distribuyendo a los asociados los materiales y utensilios para su trabajo individual o familiar a domicilio; adquiriendo e instalando medios auxiliares del trabajo para su uso por cuenta personal de los socios; conduciendo cooperativamente talleres, fincas y centros de producción, ya sean propiedad de la Sociedad, ya en arriendo, siempre que el capital social puesto en juego no exceda de los límites que se marquen reglamentariamente en relación con el número de cooperadores y con la importancia del trabajo realizado por éstos, vendiendo de preferencia a otras entidades, Cooperativas y al público en general, la producción social o la individual de los asociados; contribuyendo a la mayor cultura y preparación técnica de los asociados y sus familiares; realizando cualesquiera otras operaciones que, dentro de las disposiciones legales y los principios cooperativos, sean conducentes al mejor cumplimiento de los fines propios de este grupo de Sociedades.

Es condición necesaria y característica de las Cooperativas de trabajadores que, en caso de distribuir el excedente de los rendimientos, después de atender al fondo de reserva y a las obras sociales, se haga el reparto proporcionalmente al valor asignado al trabajo personal puesto por los asociados en la obra común.

Artículo 89. Las aportaciones de cada individuo asociado al haber social de las Cooperativas de trabajadores no podrán exceder de 1.000 pesetas en el año ni de 5.000 en total.

Artículo 90. Las Cooperativas de trabajadores no podrán emplear de un modo permanente otros trabajadores que sus mismos cooperadores. Podrán, no obstante, utilizar y remunerar los servicios complementarios de su industria propia y el concurso profesional del personal técnico y de contabilidad en la medida precisa para el desarrollo de las operaciones sociales.

El número máximo de aprendices y sus condiciones de trabajo, aun cuando sean asociados, se ajustará a lo que haya establecido para la industria correspondiente, salvo disposición especial que imponga mayor limitación.

Artículo 91. Para hacer frente a aglomeraciones imprevistas de trabajo, las Cooperativas de trabajadores podrán emplear auxiliares no asociados, cuyo número no exceda nunca de la mitad del de asociados, empleados en la tarea de que se trate.

En las faenas de recolección y operaciones de duración no superior a un mes sobre material fácilmente alterable podrán admitir hasta un número igual al de los asociados que tomen permanentemente parte activa en el trabajo en cuestión. De esta facultad no podrá usarse más de dos veces en el año.

Para la prevención de daños inminentes o reparación de accidentes, el número de auxiliares admisibles será ilimitado.

El total de jornadas de trabajo hechas por el personal no asociado, por unos u otros motivos, no podrá exceder al cabo del año de la tercera parte de las hechas por los cooperadores.

Artículo 92. Al liquidar el ejercicio el suplemento de la remuneración que, proporcionalmente, corresponda en las Cooperativas de trabajadores a la remuneración del personal no asociado, caso de no ser abonado a éste, se invertirá en obras sociales aprobadas de que puedan participar los no asociados.

Artículo 93. Las Cooperativas de trabajadores que lleguen a tener un haber social líquido que exceda de 10.000 pesetas por socio, pasarán a la categoría de Cooperativas profesionales a partir del ejercicio siguiente al en que tal ocurra.

Artículo 94. Las Cooperativas de trabajadores y sus conciertos, uniones y federaciones, tendrán derecho a concurrir como licitadores a la subasta y concurso de obras o servicios del Estado, las Mancomunidades, las Diputaciones, los Municipios y las Corporaciones públicas en general, y se les dará preferencia en igualdad de condiciones. Las fianzas que hayan de constituir se reducirán a la cuarta parte de la correspondiente a cada caso. En compensación de este beneficio se retendrá un 10 por 100 de las cantidades que la entidad concesionaria haya de percibir por razón de la obra ejecutada o del servicio o suministros hechos, hasta completar el total importe de la fianza. Las cantidades retenidas se devolverán juntamente con la fianza constituida.

Las dependencias del Estado y las Corporaciones de toda clase podrán concertar, con las Cooperativas de trabajadores, las obras, servicios y suministros de pequeña cuantía que legalmente puedan contratarse por adjudicación directa.

Artículo 95. Tendrán la consideración de populares las Cooperativas de trabajadores que, además de llenar todos los requisitos necesarios para las de su clase, consignen en los estatutos y cumplan en su funcionamiento las siguientes condiciones:

Que la aportación obligatoria de asociado no exceda de 1.000 pesetas, ni de 100 la primera entrega, permitiéndose a los cooperadores que completen su aportación con los suplementos de remuneración que puedan corresponderles, y, en caso de ser insuficientes, con un descuento hasta del 5 por 100 de las remuneraciones normales.

Que no se abone interés alguno a las aportaciones.

Que el valor en pesetas del haber social líquido, aparte del fondo de reserva irrepartible, dividido por el número de socios, no dé un cociente superior a 3.000 pesetas.

Que los rendimientos líquidos de cada ejercicio se destinen, cuando menos en un 50 por 100, a la constitución y aumento de un fondo de reserva irrepartible y al sostenimiento de obras sociales que figuren en la lista de las oficialmente aprobadas, siendo por lo menos, un 15 por 100 de los rendimientos del ejercicio lo destinado a cada una de las dos aplicaciones indicadas.

Artículo 96. Serán consideradas como Cooperativas profesionales las constituidas por agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes y, en general, por personas o entidades de-

dicadas a una misma profesión o profesiones relacionadas para realizar conjuntamente y sobre base cooperativa determinadas operaciones encaminadas al mejoramiento económico, técnico, de su explotación, y señaladamente: adquirir o producir y distribuir a los asociados los artículos que sean objeto de su comercio y las primeras materias, instrumentos y toda clase de medios de producción; adquirir maquinaria y medios de producción de todas clases para uso por los asociados; realizar en común las operaciones preliminares de la producción o, inversamente, realizar las últimas transformaciones sobre los productos de la industria de los asociados, hasta ponerlos en condiciones de venta o realizar alguna operación intermedia; ejercer en común cualquier industria y, en particular, las industrias auxiliares y complementarias de las ejercidas por los asociados; explotar combinadamente las fincas o industria de los asociados, formando una Empresa de orden superior con la unión cooperativa de las diferentes Empresas particulares; hacer análoga combinación para la ejecución de obras y servicios; vender los productos de la Cooperativa y los productos de la industria de los asociados; facilitar a éstos el crédito necesario para sus operaciones, mediante prenda o la mutua garantía; realizar cualesquiera otras operaciones encaminadas al mismo fin general, que sean complemento natural de las anteriormente señaladas o que sirvan para su mejor ejecución.

Es condición necesaria de las Cooperativas profesionales que la distribución del remanente, cuando proceda practicarla, se haga a prorrata del importe de las operaciones hechas por cada asociado con la Asociación, según se determine para cada caso.

CAPITULO XI

COOPERATIVAS DIVERSAS

Artículo 97. Las Cooperativas de crédito podrán admitir imposiciones de fondos, hacer anticipos, préstamos y descuentos, hacer cobros y pagos por cuenta de los asociados, prestarles los servicios de Banca necesarios y realizar cualesquiera otra operación que sea complementaria de las anteriores o sirva para su mejor cumplimiento.

Estas Cooperativas sólo podrán conceder créditos a los individuos o entidades que tengan la condición de asociados.

El Ministerio de Trabajo fijará los límites máximos de interés en relación con el interés legal del dinero.

Artículo 98. Tendrán la consideración de populares las Cooperativas de crédito en cuyos estatutos y funcionamiento no se encuentre cosa alguna que pugne con tal carácter y cumplan con las siguientes condiciones:

Que el número de socios no sea inferior a 100.

Que el tipo de interés abonado a las imposiciones no exceda en más de una unidad por ciento al que rija en las Cajas de Ahorros del Patronato del Gobierno.

Que no hagan préstamos de cuantía superior a 5.000 pesetas, como no sean Cooperativas inscritas en el Registro.

Que los rendimientos líquidos de cada ejercicio se destine, cuando menos, el 35 por 100 a la constitución y aumento de un fondo de reserva irrepartible.

Artículo 99. Las Cooperativas de

seguros se regirán, dentro de lo establecido en las disposiciones legales y en sus propios estatutos, por los acuerdos de la Asamblea de asegurados, los cuales habrán de ser todos socios de la Cooperativa. En caso de adoptar el régimen de prima fija, la parte de los excesos de percepción que se apliquen a la constitución de fondos de reserva o al sostenimiento de obras sociales aprobadas se devolverá a los asegurados a prorrata de las primas abonadas.

Artículo 100. El Ministerio de Trabajo podrá autorizar a las Cooperativas de seguros para que constituyan un fondo inicial de garantía con aportaciones distintas de las cuotas y primas e incluso con el concurso de personas o entidades no aseguradas, siempre que los aportadores no adquieran por ello derecho alguno a influir en la marcha social, y esté determinada la forma en que las correspondientes entidades hayan de ser substituidas en un plazo máximo prudencial con fondos propios de la Cooperativa y se cumplan además las siguientes condiciones:

Que se reserve a la Cooperativa la facultad de reintegrar o substituir esas cantidades, en todo o en parte, en cualquier momento.

Que si se trata de cantidades en metálico no se abone por su uso un interés total superior al interés legal; y si se trata de valores cuyos cupones o rentas perciban los propietarios, no se abone por el servicio más de uno y medio por ciento del importe de la garantía a que dichos valores estén afectos.

Artículo 101. Con informe favorable del Consejo de Trabajo y por analogía a lo dispuesto para las Cooperativas de consumo, las de trabajadores y las de crédito, podrá el Ministerio reconocer el carácter de populares a otras Cooperativas no profesionales que, cumpliendo los requisitos propios de las de su clase, consignen en sus estatutos la declaración de estar primordialmente constituidas para mejorar la condición económica y social de obreros y personas de medios modestos en general y cumplan además los siguientes requisitos:

El número de socios no podrá ser inferior a 150 en las poblaciones de más de 100.000 habitantes y a 75 en las capitales de provincias y poblaciones de más de 15.000 habitantes, ni inferior a 200 para las Sociedades cuyo territorio comprenda más de un partido judicial, cualquiera que sea la localidad en que tenga su domicilio.

La aportación obligatoria de cada socio para la formación del capital social se reducirá a la precisa para el desenvolvimiento de las operaciones.

Este punto se apreciará discrecionalmente por el Ministerio, según la naturaleza de la Cooperativa.

No podrá exigirse para el ingreso una primera entrega de más del diez por ciento de la aportación obligatoria, disponiendo el cooperador para completar su aportación del plazo que los estatutos señalen, no inferior a tres años y siéndole de abono los excesos de percepción que puedan corresponderle.

En caso de abonar algún interés a la participación de cada asociado en el capital social, el tipo correspondiente no podrá ser superior al que rija en las Cajas de Ahorro de Patronato del Gobierno.

Del exceso de percepción se destinará el 30 por 100, cuando menos, al fondo de reserva irrepartible y a obras sociales que figuren entre las aproba-

das oficialmente, sin que a ninguna de estas inversiones se pueda aplicar menos de un 10 por 100.

Artículo 102. Por disposición ministerial podrá fijarse un límite superior al cociente de haber social líquido de las Cooperativas populares, partido por el número de cooperadores y también a la cuantía de las operaciones (préstamo en las de crédito, riesgo cubierto en las de seguro, etc., etc.).

CAPÍTULO XII

COOPERATIVAS ESCOLARES

Artículo 103. Se incluirá en el Registro especial de Cooperativas escolares a las constituidas entre los alumnos de los Centros de enseñanza, por sí o con la ayuda y el concurso de Profesores, padres y alumnos o personas que hagan sus veces, antiguos alumnos y personas que simpatizan con la obra y deseen favorecerla con objeto de inculcar entre los escolares la idea de la cooperación y adiestrarlos en las prácticas de la organización y régimen cooperativo.

El Registro especial de Cooperativas escolares se llevará por el servicio técnico correspondiente del Consejo de Trabajo, bajo la inspección inmediata de la Subcomisión de cooperación.

Artículo 104. Entre los objetos señalados a las Cooperativas escolares figurará en primer término, el suministro para los asociados de material de estudio y artículos de consumo y uso personales.

La Sociedad, podrá también, sin que por ello pierda su carácter predominante de Cooperativa de consumidores extenderse a practicar en pequeña escala todas las formas de cooperación que tenga a su alcance y a organizar cualesquiera obras sociales complementarias, bien directamente, bien por medio de secciones en que puedan inscribirse los cooperadores que lo deseen. Las Cooperativas escolares se constituirán todas con la condición de responsabilidad limitada.

Artículo 105. Los Maestros de las Escuelas nacionales y los Jefes o Directores de todos los Centros oficiales de enseñanza facilitarán, por los medios que tengan a su alcance, la creación y el funcionamiento de las Cooperativas escolares respectivas.

Artículo 106. No se permitirá que en un mismo Centro de enseñanza y para la misma finalidad se constituya más de una Cooperativa escolar, salvo el caso de que, por ser muy grande el número de alumnos y concurrir alguna otra circunstancia excepcional, se conceda autorización especial por el Ministerio de Trabajo, oyendo a la Subcomisión de cooperación.

La característica diferencial entre una y otra Cooperativa no podrá referirse a cuestiones de confesión o de partido. Se cuidará muy especialmente de que la duplicidad de Cooperativas no sirva para provocar o ahondar divisiones o antagonismos entre los escolares. Se hará siempre resaltar el principio de que la cooperación entre los escolares, mucho más aún que entre los adultos, ha de ser campo común de concordia, colaboración y comprensión mutua, y no instrumento de lucha.

Artículo 107. Las Cooperativas escolares tendrán todas la condición de populares.

Artículo 108. Los trámites para la constitución de las Cooperativas escolares se acomodarán a lo establecido para las Cooperativas en general, con las siguientes condiciones:

La petición de calificación profesional y los ejemplares de los estatutos irán firmados por cinco alumnos iniciadores, cualquiera que sea su edad, pero será preciso el informe del Maestro si se trata de una Escuela o del Jefe del establecimiento de enseñanza respectivo.

En caso de recurrirse contra la negativa de admisión o de inculcación en el Registro, el recurso habrá de estar interpuesto con autorización de los padres o representantes legales de los iniciadores.

Artículo 109. Los socios no alumnos podrán tomar parte en todas las operaciones de las Cooperativas escolares en cuanto suponga ejemplos, guía, estímulo o ayuda, pero no para su propia ventaja.

A los fines de ejemplo, estímulo y ayuda, los asociados no alumnos podrán participar en las operaciones de las Cooperativas escolares, sin límite alguno durante el primer ejercicio social, y, respecto a los servicios de nueva implantación durante los tres primeros meses de funcionamiento.

Las mismas Cooperativas señalarán las limitaciones que estimen convenientes, fuera de estos periodos, siempre que sean adecuadas para asegurar que la participación total de los asociados no alumnos no exceda al cabo de cada ejercicio de la cuarta parte del volumen de operaciones de la Cooperativa.

Artículo 110. Fuera de la elección de Depositario de fondos y Asesores, los socios no alumnos sólo podrán tomar parte en las votaciones cuando se trate de modificación de los estatutos, disolución de la Cooperativa y demás casos que estén expresamente consignados en los estatutos.

Artículo 111. En cada Cooperativa escolar habrá un Depositario de fondos, socio no alumno mayor de edad, elegido por la Junta general. Cuando haya más de diez que reúnan las condiciones de padres de socio alumno, la elección deberá recaer necesariamente en uno de ellos.

La contabilidad y el detalle de los servicios de Tesorería estarán a cargo del socio o socios alumnos, individuos de la Junta directiva, elegidos según prescriban los estatutos. El Consejo asesor prestará la asistencia que sea precisa en cada caso.

Artículo 112. El funcionamiento de una Comisión de inspección de cuentas, formada por socios alumnos y elegida por la Junta general, será preceptivo en las Cooperativas escolares de más de 40 socios y recomendable en todas.

Artículo 113. En las Cooperativas escolares habrá un Censor, que será el Maestro si se trata de Escuela primaria, o el Profesor en quien delegue el Jefe del Establecimiento.

Habrán también un Consejo formado por dos o cuatro asesores elegidos por los socios no alumnos entre los de su número que sean mayores de edad, bajo la presidencia del Censor.

El Censor deberá asistir a todas las reuniones y cuidará muy especialmente de que no se infrinjan las disposiciones legales ni los estatutos y reglamentos de la Cooperativa y de que ésta no sirva de pretexto para planes, combinaciones o acuerdos impropios de sus fines y carácter.

En caso necesario podrá substituir al Censor uno de los asesores.

Artículo 114. Los Censores señalarán los acuerdos que se opongan a alguna disposición legal o a los estatutos de la Cooperativa. Tales acuerdos quedarán en suspenso a partir de

la fecha en que la oposición sea señalada.

En el plazo de quince días, a partir de la misma fecha, la Cooperativa podrá: desistir del acuerdo de una manera expresa; modificarlo, haciendo desaparecer la oposición; acudir en consulta a la Subcomisión de cooperación. De no hacerse ninguna de estas tres cosas, se considerará el acuerdo definitivamente anulado.

Artículo 115. Los Censores, los Asesores, los socios no alumnos y en caso necesario, los Profesores del Establecimiento, prestarán ayuda y consejo a los cooperadores escolares, ilustrándoles acerca de las cuestiones legales o de organización cooperativa y cualesquiera otras de la competencia de aquéllos que se susciten, pero sin suplantar jamás la iniciativa de los escolares. Muy al contrario, procurarán estimular en ellos el desarrollo del espíritu de iniciativa y el sentimiento de responsabilidad.

Artículo 116. Cuando se trate de Cooperativas de alumnos de enseñanza universitaria o de grado superior equivalente, la intervención de los socios no alumnos se reducirá al mínimo indispensable y los Censores se limitarán al cuidado vigilante del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 113 y 114.

Artículo 117. Las Cooperativas escolares no podrá servir al público. Esto no excluye la asistencia y participación de personas no asociadas a los festivales, concursos, pequeñas exposiciones y demás actos análogos que las Cooperativas puedan organizar por sí o por sus secciones deportivas, artísticas, etc., si las tuvieren.

Artículo 118. En caso de perturbación estudiantil, las Cooperativas escolares podrán ser intervenidas al solo efecto de evitar que sirvan de instrumento para la perturbación o que ésta cause daño a los intereses de la Cooperativa.

La necesidad de la intervención habrá de ser declarada por el Ministerio de que dependa el centro de enseñanza correspondiente.

Artículo 119. Para la inspección de las Cooperativas escolares y la imposición de sanciones, en su caso, se seguirán las reglas especiales siguientes:

1.ª La inspección podrá hacerse por los funcionarios autorizados por el Ministerio para inspeccionar Cooperativas y, también por cualquier funcionario del Ministerio, del Consejo de Trabajo, del Profesorado oficial o de la Inspección de enseñanza, designado por la Subcomisión de cooperación.

2.ª La imposición de sanciones corresponderá a la Delegación local del Consejo de Trabajo, si la hubiere, y, en su defecto, a la provincial. La resolución definitiva de los recursos corresponderá a la Subcomisión de cooperación.

3.ª En el fallo se consignará la cuantía de la multa que correspondería imponer dada la naturaleza de la infracción, si no se tratase de una Cooperativa escolar; pero la multa impuesta podrá, sin límite, reducirse discrecionalmente atendiendo a la edad y grado de preparación de los infractores. El máximo no pasará, en ningún caso, de la quinta parte del marcado en las reglas generales para la misma o análoga infracción.

Artículo 120. En todo lo no expresamente determinado para las Cooperativas escolares, por la ley, reglamento o disposición ministerial, se aplicarán por analogía las reglas generales.

Las resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre cuestiones relativas a las Cooperativas escolares, se considerarán de carácter discrecional, sin ulterior recurso.

Artículo 121. Lo dispuesto en los artículos anteriores no se opone a que los estudiantes de capacidad legal suficiente formen, con independencia de los Centros de enseñanza, cualesquiera Cooperativas no escolares, sin opción a los beneficios de los escolares y sin sujeción a sus limitaciones.

CAPÍTULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 122. Salvo disposición expresa en contrario, se aplicarán a las Cooperativas que obtengan la calificación de populares las exenciones, facultades y beneficios de toda clase concedidos por diferentes disposiciones a las denominadas obreras.

Artículo 123. Las exenciones y beneficios de todas clases concedidos a las Cooperativas, serán aplicables a sus obras sociales, sin perjuicio de las demás ventajas que en virtud de disposiciones especiales les puedan corresponder, y siempre que dichas obras sociales figuren en la lista de las oficialmente aprobadas.

Artículo 124. Las Cooperativas intervenidas de funcionarios, las de Casas baratas, las de las Colonias agrícolas, las de los Pósitos de pescadores y, en general, todas las establecidas al amparo de una legislación especial habrán de solicitar su inscripción en el Registro y guardarán con el Consejo de Trabajo y sus Delegaciones las mismas relaciones que las demás Cooperativas, pero continuarán dependiendo, además, del Centro oficial a que corresponda por razón de los beneficios especiales que les estén concedidos y de las correlativas obligaciones impuestas.

Artículo 125. La Subcomisión de cooperación del Consejo de Trabajo, podrá encargarse de la resolución de diferencias entre los socios y las Cooperativas o entre unas Cooperativas y otras o sus Uniones y Federaciones, cuando las partes interesadas se sometan voluntaria y expresamente al fallo de la Subcomisión.

Artículo 126. El servicio de consultorio, la distribución de publicaciones y modelos y la inclusión en algunas estadísticas podrán hacerse extensivos a las entidades que, aun no pudiendo ser incluidas en el registro de Cooperativas, estén en vías de transformarse en Cooperativas, o participen del carácter de tales, o estén ligadas con el movimiento cooperativo en medida suficiente a juicio de la Subcomisión de cooperación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.ª Las entidades constituidas con anterioridad al 7 de Julio de 1931 que quieran acogerse al nuevo régimen de Asociaciones cooperativas, habrán de solicitarlo en término de tres meses, a partir de la publicación del presente reglamento en la *Gaceta de Madrid*, remitiendo al registro de cooperativas dos ejemplares de sus respectivos estatutos y reglamentos.

En el plazo de tres meses, a partir de la fecha en que les sean señalados los puntos necesitados de modificación para acomodarse a las nuevas disposiciones legales, deberán haber aprobado la reforma de los estatutos y remitido la certificación del acta correspondiente. De no hacerlo así, se considerará desistida la solicitud.

Recibida la documentación y resultando todo conforme, se hará la cla-

sificación e inclusión en el registro.

En la tramitación y en los recursos que puedan originarse se aplicará por analogía lo dispuesto para la inscripción de nuevas Sociedades.

2.^a Las Sociedades anteriormente constituidas que no soliciten su inclusión en el registro de Cooperativas o a las que les sea denegada, no podrán ostentar el carácter de Cooperativas ni incluir en sus rótulos, membretes, etc., las palabras cooperativas y cooperación, ni sus derivados y similares pasados que sean tres meses después de expirado el plazo para solicitar la inclusión o la denegación de ésta, en su caso.

Si las palabras en cuestión formaren parte integrante de la denominación de la Sociedad, habrán de adoptar otra nueva; pero durante dos años podrán hacerla seguir de la indicación de la denominación antigua, en forma que no haya duda acerca de cuál sea la que está en vigor.

3.^a Las Sociedades constituidas con anterioridad al 7 de Julio de 1931 cuyo carácter cooperativo no ofrezca duda en los demás respectos, pero en las que haya parte de fundador, acciones preferentes o derechos especiales o cualesquiera combinaciones análogas a las referidas en el artículo 3.^o del Decreto de 4 de Julio de 1931, podrán ser registradas como Cooperativas, previa la anulación en forma legal de los referidos derechos, acciones partes de fundador o combinaciones análogas.

Cuando estas ventajas hayan sido establecidas como indemnización parcial por trabajos personales hechos y no remunerados, o en pago de aportaciones y gastos suplidos, podrá autorizarse su transformación en un crédito contra la cooperativa, amortizable en la forma y plazos que se determinen, con arreglo a la cuantía del crédito y a los medios de la Cooperativa. Será condición necesaria que la valoración del crédito y el plan para su amortización sean aprobados por el Ministerio, con informe favorable del Consejo de Trabajo.

4.^a Durante un plazo que terminará en 31 de Diciembre de 1934, las Sociedades cooperativas constituidas con anterioridad al 7 de Julio de 1931, quedarán exceptuadas de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 85 y en el último del artículo 95.

5.^a El establecimiento de la enseñanza de la cooperación en todos los Centros de enseñanza de grado superior al primario, se hará de una manera progresiva y con toda la rapidez que permitan los recursos del presupuesto y la necesidad de hallar o formar el correspondiente personal especializado.

La implantación de las nuevas enseñanzas deberá quedar terminada en el plazo máximo de cinco años. Durante el período de implantación, podrán utilizarse en unos Centros los servicios de Profesores de otros, y podrán también nombrarse Profesores especiales o interinos, si los respectivos Ministerios lo estiman así conveniente.

6.^a El Ministro de Trabajo determinará las organizaciones que hayan de designar los Vocales representantes de Cooperativas para completar la Subcomisión de cooperación, interin se celebren las elecciones de Vocales para el Consejo de Trabajo.

Madrid, 2 de Octubre de 1931.—Francisco Largo Caballero.

(Gaceta del 21 de Octubre.)

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION

ORDEN

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por la Comisión Mixta Arbitral Agrícola, y teniendo en cuenta además lo dispuesto en el Decreto de 31 de Octubre del corriente año marcando normas a los Jurados mixtos de la Propiedad rústica,

Vengo en aprobar el siguiente reglamento-tipo para la actuación de dichos Jurados.

I.—ORGANIZACION

Artículo 1.^o El Jurado mixto de la Propiedad rústica (provincial o comarcal), con jurisdicción sobre... y capitalidad en..., consta de cinco Vocales representantes de los propietarios rústicos de dicha jurisdicción y cinco Vocales representantes de los colonos, con los correspondientes suplentes unos y otros.

Su actuación se regirá por este reglamento, en armonía con la ley de 7 de Mayo de 1931, relativa a los Jurados mixtos, y por las demás disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten relativas a estos organismos.

Artículo 2.^o La competencia del Jurado mixto se extenderá a cuantos casos afecten a tierras enclavadas dentro de la jurisdicción que le está asignada, aun cuando los propietarios radiquen fuera de ella.

Artículo 3.^o El Presidente, Vicepresidente y Secretario del Jurado tendrán las facultades y deberes anejos a sus cargos y los que especialmente se consignan en este reglamento.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente le sustituirá el Vicepresidente.

El Secretario será sustituido por el Vocal que señale a este efecto el Jurado.

Artículo 4.^o Serán facultades del Presidente: representar al Jurado; resolver las cuestiones de régimen interior; convocar y presidir las sesiones; fijar el orden del día; conceder o retirar la palabra; dirigir los debates y cumplimentar los acuerdos; ejercer la ordenación de pagos; mantener la comunicación del Jurado con el Gobierno y Centros oficiales; solicitar de dichos Centros por mediación del Ministerio de Trabajo y Previsión, los datos, documentos e informes que el Jurado necesite para la solución de sus asuntos, y sostener las relaciones con otros organismos o particulares.

Artículo 5.^o El Jurado elegirá libremente al Vicepresidente, previo acuerdo entre los Vocales representantes de los propietarios y los de los colonos. Si no lograrse acuerdo, lo comunicará el Presidente al Ministerio de Trabajo y Previsión, a los efectos del artículo 15 de la ley de 7 de Mayo de 1931.

Artículo 6.^o El Secretario no tendrá ni voz ni voto en las deliberaciones, pero informará y asesorará siempre que para ello sea requerido; intervendrá como tal en todos los actos del Jurado, levantando acta de sus sesiones; dará fe de los acuerdos recaídos en las mismas; suscribirá las convocatorias; despachará la correspondencia con el Presidente; custodiará los libros y documentación de Secretaría, y ejercerá la jefatura y dirección del personal de esta.

Artículo 7.^o Los Vocales elegirán del seno del Jurado un Tesorero y un Vicesecretario.

El Tesorero custodiará los fondos del Jurado y realizará los ingresos y pagos autorizados por el Presidente e

intervenidos por el Secretario, que desempeñará las funciones de Contador e Interventor.

El Vicesecretario suplirá al Secretario en casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 8.^o Los Vocales titulares deberán asistir a todas las sesiones, y tendrán derecho a ser elegidos para todos los cargos de las ponencias o Comisiones especiales que se creen; actuarán con voz y voto en las sesiones; podrán presentar proposiciones; dirigir preguntas y formular ruegos.

Artículo 9.^o Cada Vocal titular tendrá un Vocal suplente, que le sustituirá en caso de ausencia o enfermedad. A este objeto, el Vocal titular que no pueda asistir a la sesión lo comunicará a su respectivo suplente, a los efectos de la asistencia de éste, notificándolo por escrito al Presidente y haciendo constar los motivos de su ausencia.

Si tampoco el suplente pudiera asistir en el caso previsto en el párrafo anterior, deberá asimismo excusarse, ante el Presidente, expresando la causa.

Artículo 10. Si a la hora señalada para celebrar la sesión dejaren de concurrir un Vocal titular y su suplente respectivo, asistiendo, en cambio, alguno o algunos suplentes cuyos titulares también asistan, el Presidente designará entre éstos, a propuesta de la representación incompleta, el suplente que haya de sustituir al Vocal no asistente.

Artículo 11. Los Vocales suplentes tendrán los mismos derechos y obligaciones que los titulares cuando actúen supliéndolos. En todo caso podrán asistir a las reuniones ordinarias con voz, pero sin voto, a cuyo efecto serán también citados.

Artículo 12. Los Vocales titulares de los Jurados mixtos cesarán en sus cargos por las siguientes causas: a) renuncia; b) traslado definitivo de residencia a población situada fuera de la jurisdicción del Jurado; c) dejar de pertenecer a la Sociedad, Asociación o entidad que le eligió; d) dejar de concurrir sin justa causa a cinco reuniones consecutivas del Pleno o ponencia del Jurado. En cualquiera de estos casos sustituirá al Vocal titular en todas sus funciones el Vocal suplente respectivo.

Cuando en virtud de estas bajas queden vacantes la mayoría de los cargos de Vocales suplentes de cualquiera de las dos representaciones, se comunicará el caso al Ministerio de Trabajo y Previsión.

II.—FUNCIONAMIENTO

Artículo 13. La convocatoria para las sesiones del Jurado corresponderá al Presidente, y deberá ser hecha en forma personal a los Vocales. Procederá a la celebración de sesión fuera de los casos en que el Presidente lo estime oportuno cuando lo soliciten dos por lo menos de los Vocales.

Artículo 14. El Presidente dirigirá los debates, cuidando de que éstos se mantengan en los términos de corrección, mutuo respeto y cortesía de bida.

Podrá también limitar el uso de la palabra cuando un tema esté suficientemente discutido a juicio del Jurado, y retirársela a los Vocales que den motivo para ello por su actitud en el seno del mismo, después de llamarlos al orden por dos veces.

Artículo 15. El Jurado podrá designar de su seno las ponencias que juzgue más convenientes para la eficacia de su cometido, siempre que en ellas sea igual el número de Vocales

representantes de propietarios y de colonos.

El Presidente del Jurado será Presidente nato de cada una de estas ponencias, pudiendo delegar en el Vicepresidente cuando lo estime oportuno.

Los acuerdos de las ponencias se someterán a la resolución definitiva del Jurado en pleno.

Las ponencias actuarán en los días y horas que sus componentes acuerden por mayoría. El Secretario del Jurado hará las convocatorias de las mismas en los términos ordinarios.

Artículo 16. Los Jurados adoptarán sus acuerdos por mayoría absoluta de propietarios y colonos en las sesiones de primera convocatoria, y por mayoría absoluta de asistentes en las de segunda.

En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente, siendo preciso que antes de emitirlo exhorte a la avenencia a las dos representaciones del Jurado.

El Presidente carecerá de voto en todos aquellos casos en que no haya empate entre los Vocales que asistan a la sesión.

Artículo 17. Cuando en las sesiones del Pleno o de las Ponencias se trate un asunto que afecte particularmente a uno de los miembros del Jurado, deberá el interesado ser oído en la discusión, pero se abstendrá de tomar parte en la votación.

Artículo 18. El planteamiento de las cuestiones relativas a normas generales para la explotación de las tierras mediante arriendos, aparcerías o formas análogas estará reservada a los miembros del Jurado o a las Sociedades interesadas.

Artículo 19. Toda reclamación ante el Jurado que no sea de las expresadas en el artículo anterior se iniciará mediante un escrito que presentará el interesado en papel de oficio con una copia simple, determinando, además de su nombre, apellidos y domicilios suyo y los de la parte adversa, la finca de que se trate, su cabida y término donde se encuentre, cantidad y fruto que se satisface o recibe por arriendo, aparcería, etc., y todas cuantas prestaciones, derechos u obligaciones se hayan estipulado, indicando lo que solicita, determinación de bases para el contrato, modificación de la renta, precio o merced que paga o recibe, anulación de cláusulas contenidas en el contrato o que vayan contra la ley o la explotación racional del predio, aprecio de mejoras en las fincas realizadas o indemnización de perjuicios ocasionados, anulación de subarriendos o los conflictos que hayan surgido entre propietarios y arrendatarios. A dicho escrito se acompañarán cuantos documentos sirvan para acreditar las manifestaciones que en el mismo se contienen, y aquellas otras que contribuyan a la mejor comprensión y esclarecimiento de los hechos que forman su base.

Artículo 20. El Presidente cuidará de advertir a las partes los defectos u omisiones en que hubieren incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsanen, como igualmente se declarará incompetente si, a su juicio, creyese que la petición que se deduce no entra dentro de las atribuciones legales del Jurado. Contra este acuerdo podrá ejercitarse el recurso de reposición, y si se denegara, el de apelación al Ministerio de Trabajo. Estos recursos deberán entablarse dentro de los tres días de notificarse la resolución precedente.

Artículo 21. Cuando se solicite por

los demandantes la revisión de contratos para la reducción de rentas será condición indispensable que se consignen, en metálico o en frutos, ante el Jurado mixto, la renta catastral o la mitad de la renta pactada si se trata de arrendamiento, y la mitad de la participación que corresponda al arrendador si se trata de aparcerías. La cantidad consignada en metálico o en frutos pertenece al arrendador.

Si el arrendador hubiere trabado embargo sobre los bienes del arrendatario o aparcerero para el pago de la renta, no será necesario verificar la consignación.

Tampoco será necesaria la consignación cuando el colono o aparcerero tenga anticipada al arrendador la mitad al menos, de la renta y así lo acredite.

La consignación establecida por el presente artículo deberá verificarse al tiempo de solicitar la revisión o, en su defecto, en un plazo que no podrá exceder de cinco días. Pasado este plazo sin hacer la consignación, se declarará caducado el derecho del demandante.

La consignación en metálico se verificará depositando en la mesa del Juzgado la cantidad correspondiente. La consignación en frutos se verificará constituyéndose el propio solicitante en depositario interino de los mismos, mientras el Jurado ordena su entrega al arrendador o su depósito definitivo con arreglo a los dos artículos siguientes.

Artículo 22. El Jurado, de oficio, requerirá inmediatamente al arrendador para que se haga cargo de la cantidad consignada o fruto depositado. En este momento le hará también entrega de la copia de la solicitud presentada por la persona que haya solicitado la revisión.

Artículo 23. Cuando el requerido se negare a recibir la consignación o no se hiciese cargo de ella inmediatamente, el Jurado procederá al depósito definitivo de los frutos o rentas en la forma que determina el Real decreto de 24 de Diciembre de 1906. Los gastos que origine este depósito serán de cuenta del arrendador.

Artículo 24. Si el propietario no formulare oposición pasado el término de ocho días, a contar del siguiente al en que le fué entregada la copia de la solicitud, el Jurado, de oficio, o a instancia del solicitante aprobará la consignación verificada, y sin otro trámite dictará resolución determinando la renta.

Si el propietario formulare oposición al Jurado aprobando la consignación verificada, declarará iniciado el juicio arbitral de revisión de rentas.

Artículo 25. Podrán comparecer como partes en las contiendas los interesados mayores de edad, los menores e incapacitados en la persona de su representante legal, los administradores con poder general y mandatarios especiales con poder notarial o simplemente por designación y apoderamiento en comparecencia ante la Secretaría del Jurado.

Artículo 26. La tramitación de los juicios y contiendas de la competencia de este Jurado será gratuita, con la excepción contenida en el artículo 24, hasta la ejecución de la sentencia, que realizarán los Tribunales ordinarios por el procedimiento de la ley de enjuiciamiento civil.

Artículo 27. Iniciado el juicio arbitral, el Presidente procurará, mediante citación de los interesados, obtener avenencia. Si se consiguiera acuerdo, de su resultado se levantará

la oportuna acta, en la que se consignarán con la posible concisión las nuevas bases, las cláusulas modificadas y las estipulaciones que se anulen, siendo obligatorio el convenio para las partes y por el tiempo que establezca o por aquel que falta para extinguir el contrato.

Artículo 28. Si el demandante no asistiere al acto conciliatorio habiendo sido citado, se le tendrá por desistido de su demanda. Si no asistiere el demandado y los motivos de su inasistencia no estuvieren justificados a juicio del Jurado mixto, se le impondrá una multa, que no podrá bajar de 50 pesetas ni exceder de 500.

La asistencia al acto conciliatorio podrá verificarse por medio de mandatario o representante, siempre que éste se halle provisto de poder o autorización con expresa facultad para transigir. La autorización podrá ser extendida en documento privado.

Artículo 29. Caso de no producirse acuerdo, se señalará nuevo día para la celebración de la sesión en que se vea y resuelva la cuestión sometida al Jurado mixto, pudiéndose para dicho acto interesarse por el Presidente, por sí o a petición de los Vocales, bien de las partes o ya de las dependencias y organismos oficiales, todos aquellos documentos que sirvan y contribuyan a la mejor comprensión del asunto promovido, así como también al nombramiento de asesor o asesores que se estimen necesarios.

Las partes serán citadas con tres días de antelación por lo menos, previniéndose en la citación de que asistan provistas de todos los medios de prueba de que intenten valerse.

Los gastos que ocasione la práctica de prueba serán a cargo de la parte que la proponga. Esta prueba podrá ser adicionada con la que el Jurado acuerde, sin limitación alguna, si no estima bastantes las interesadas por las partes, y a cargo de entre ambas. Estas pruebas se practicarán en el acto; pero si excepcionalmente hubiera alguna que no pudiera ejecutarse inmediatamente, el Jurado concederá un término lo más breve posible, teniendo en cuenta las características del medio de prueba objeto del aplazamiento.

Artículo 30. Celebrado el juicio a que se refiere el artículo anterior, el Presidente redactará el veredicto que deba contestar el Jurado y lo leerá a las partes, quienes podrán proponer la adición o modificación de alguna o algunas preguntas.

Si esta petición fuese desestimada, los interesados podrán hacerlo constar en el acta.

Entre las preguntas del veredicto figurarán necesariamente las relativas a la definición de los contratos de arriendo o explotación de tierras discutidos entre las partes cuando éstas los designen con nombres no usuales en la legislación civil.

Artículo 31. Al votar el veredicto, cualquier Vocal podrá explicar su voto y hacer constar brevemente en el acta como manifestaciones suyas las que tenga por conveniente.

El acta expresará siempre si los acuerdos se han adoptado por unanimidad o mayoría y en el segundo caso los votos obtenidos por cada parte.

Artículo 32. En los juicios de revisión de renta, una de las preguntas del veredicto será la relativa a si se entiende procedente la reducción y, en caso afirmativo, su cuantía.

Esta pregunta podrá ser contestada independientemente por los Vocales propietarios y colonos cuando entre ellos no mediase acuerdo.

Las contestaciones dentro de cada representación se dictarán por mayoría de votos y señalarán numéricamente, o con reducción a tantos por ciento, las reducciones que se estimen oportunas, cuando éste fuese el caso.

Artículo 33. Con arreglo a las contestaciones dictadas por el Jurado al veredicto, el Presidente dictará su fallo en el plazo de tres días, razonándolo en punto de hecho y consideraciones de derecho o equidad. En casos de revisión de renta, cuando hubiere mediado acuerdo entre las representaciones propietaria y arrendataria del Jurado para no estimar procedente la rebaja o para fijar a ésta un tipo, el Presidente acomodará su fallo a dicho acuerdo.

En caso contrario, su fallo habrá de estar comprendido entre los límites señalados con las contestaciones de las representaciones propietaria y arrendataria, o bien pronunciarse a favor de alguna de ellas.

Artículo 34. Las resoluciones que dicte el Jurado serán notificadas a las partes y contra ellas se admitirá recurso ante la Sala social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días. En las de reducción y aplazamiento de rentas, ante la Comisión mixta arbitral agrícola, en el mismo plazo.

Al comunicar el fallo a los interesados, se les informará en la misma notificación del recurso que contra aquél puedan utilizar, advirtiéndoles expresamente que tales recursos, para ser válidos, deberán interponerse ante el mismo Jurado que dicte la resolución.

Entablado un recurso, el Presidente del Jurado lo remitirá a la Sala de Derecho Social del Tribunal Supremo o a la Comisión mixta arbitral agrícola, según los casos, acompañando todos los antecedentes originales del asunto, y si lo entendiese oportuno, su informe sobre el mismo y emplazando a los interesados para que en el término de diez días aleguen por escrito ante el organismo que conozca del recurso cuanto estime conveniente.

Artículo 35. Los recursos sobre los asuntos a que se refiere el apartado a) del artículo 12 de la ley de 7 de Mayo de 1931 podrán ser únicamente interpuestos por los Vocales del Jurado o por las asociaciones de propietarios o arrendatarios radicantes dentro de la jurisdicción del Jurado o extensivas a ella aunque su domicilio radique fuera.

Los recursos relativos a las cuestiones señaladas en los demás apartados de dicho artículo, podrán ser interpuestos sólo por sus respectivos interesados.

Artículo 36. Los acuerdos que adopte el Jurado mixto serán ejecutivos cuando queden firmes.

Una vez firmes los acuerdos de carácter general, se notificará a los interesados y se les dará la mayor publicidad para que lleguen a conocimiento de todas las entidades o personas a quienes afecte.

III.—SANCIONES

Artículo 37. La infracción o incumplimiento de los acuerdos firmes de carácter general, podrá ser sancionada por el Jurado con la multa de 25 a 250 pesetas, agravada si existe reincidencia, pero sin que nunca pueda exceder de 1.000 pesetas. A los efectos de imposición de sanciones, éstas se aplicarán por cada una de las faltas cometidas, cuando sean varias las apreciadas al mismo infractor.

Artículo 38. El Jurado mixto, al

conocer de la infracción de algunos de sus acuerdos, oír de palabra o por escrito al infractor en el término del tercer día ampliable por otros tres más, si reside fuera de la localidad, y resolverá sobre el caso, pudiendo aplicar, si lo estima procedente, un apercibimiento o la multa señalada en el artículo anterior.

Artículo 39. Contra la imposición de sanciones económicas, se podrá recurrir ante el propio Jurado en el término del quinto día, cuando no excedan de 100 pesetas; rebasando esta cifra hasta el máximo establecido, el recurso se entablará ante el Ministerio de Trabajo en el término de diez días.

Será condición precisa para poder entablar el recurso depositar en la Secretaría del Jurado el importe de la sanción impuesta.

El recurso se tramitará en todo caso con audiencia de los interesados, que informarán por escrito u oralmente por sí mismos o por personas que les representen debidamente autorizadas.

Artículo 40. Si el infractor se negare al pago, una vez firme la sanción, en el término de quince días, se dirigirá por el Presidente el oportuno oficio al Juez de primera instancia que corresponda, para que se proceda al cobro por la vía de apremio con la certificación del descubierto.

Artículo 41. El producto de las multas que haga efectivas el Jurado mixto, ingresará en el Ministerio de Trabajo y Previsión con destino a las instituciones de seguro contra el paro de los trabajadores agrícolas, y en su defecto, a las instituciones de previsión de dicho centro.

Artículo 42. El Jurado mixto podrá imponer las sanciones a que se refiere el artículo 32, a quienes de cualquier modo entorpezcan su funcionamiento o la libre actuación de los Vocales, como consecuencia de acuerdos tomados o asuntos sometidos a su conocimiento.

IV.—RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 43. Todos los años formará el Jurado su presupuesto de gastos e ingresos, remitiéndolo por duplicado al Ministerio de Trabajo para su aprobación con dos meses de antelación al comienzo del ejercicio económico; y dentro de los dos posteriores al término de cada ejercicio, enviará, también por duplicado, a dicho Ministerio la cuenta de liquidación del presupuesto venido.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 4 de Octubre de 1931.—

Francisco L. Caballero.

Señor Director general de Acción Social.

(Gaceta del 5 de Noviembre).

Consultas Públicas Provinciales

completamente gratuitas

Consulta de Puericultura y enfermedades de los niños de pecho.—(Gota de Leche). Martes, de cuatro a cinco de la tarde, y sábados, de doce a una.

Enfermedades cancerosas.—Hospital de la Misericordia.—Martes y sábados, a las nueve de la mañana.

IMPRESA PROVINCIAL